

**LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPARTIDISTA COLOMBIANO:
APERTURA Y VIOLENCIA (1986-2001)**

JAVIER CAMILO CAMARGO GARCÉS

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

ANDRÉS DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA

Politólogo, doctor en Investigación en Ciencias Sociales

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C.
2018**

| | |
|--|----|
| Introducción: | 1 |
| 1. Para abordar los partidos colombianos. | 6 |
| 1.1. Cómo abordar los partidos políticos colombianos: | 9 |
| 1.2. Por qué abordar los partidos políticos colombianos: | 10 |
| 2. La particularidad colombiana. | 19 |
| 2.1. El problema de la fragmentación: | 22 |
| 2.2. El problema de la represión: | 25 |
| 3. Violencia política y apertura democrática. | 28 |
| 3.1. El sistema <i>político</i> colombiano en la pre-constituyente: | 30 |
| 3.2. Los partidos políticos de lo micro a lo macro: | 35 |
| 3.3. Represión política desde lo local: | 40 |
| Conclusiones: | 49 |

Introducción:

El sistema político colombiano se sostuvo gracias a un bipartidismo lo suficientemente robusto y agresivo para mantenerse firme por más de 150 años. Su representativa personalidad se mantuvo a pesar de múltiples guerras civiles (que se hicieron sentir más en lo regional), pequeñas reformas y grandes asambleas constitucionales (Tirado, 1978). El sistema se mantuvo cerrado todo el tiempo, manteniendo a las nuevas fuerzas políticas fuera del espectro nacional.

Ya fuese el partido opositor o un nuevo movimiento político que buscaba representación en el gobierno nacional, el partido que se encontraba en el poder relegaba a su contraparte y se encargaba de mantener a raya a cualquier nuevo contendiente (Gutiérrez y Rodríguez, 2014). De esta manera, los llamados “terceros partidos” (Medina, 1979) fueron víctimas de exclusión política bajo estrategias de censura a sus lógicas de expresión, o por pura y dura represión violenta a sus abanderados durante gran parte del siglo XX, siendo así las fuerzas políticas que se enfrentaban al *statu quo* rápidamente acalladas (Pizarro, 1997).

El modelo bipartidista inició su fin con la Constitución de 1991², propugnada por los tradicionales -de la mano con nuevas fuerzas que buscaban establecerse en la política colombiana- a causa (y en respuesta) de la compleja realidad política y socioeconómica que vivía el país. El sistema multipartidista nacional que pretendía implantarse se encontró de frente con el creciente fenómeno de la fragmentación de los partidos políticos tradicionales (Gutiérrez, 2002; Pizarro, 2002; Duque, 2006), la violencia política que venía en aumento desde los ochentas (Matta, 2002; González, Bolívar y Vázquez, 2003; Romero, 2003), y la aparición de nuevos actores sociopolíticos (generalmente relacionados de alguna manera con el tradicionalismo). El sistema político ha tenido que desarrollarse en un entorno altamente nocivo, en donde los primeros intentos de apertura política se vieron

² Antes de esto había partidos y movimientos fuera de los tradicionales pero, o eran reprimidos, o no tenían gran importancia electoral, limitándose a lograr éxitos electorales efímeros.

enmarcados por una muy fuerte represión violenta dirigida hacia las nuevas fuerzas, las cuales iban aumentando su influencia desde lo local.

La nueva Constitución se presentó como la gran conclusión de algunos procesos políticos que venían en desarrollo desde mediados de los ochentas, siendo importante destacar dos: primero, las dinámicas interpartidistas, profundamente fragmentadas desde el Frente Nacional, no buscaron unificarse; los incentivos normativos de la Constitución y el contexto en general celebraba la apertura, así que las antes fracciones pudieron convertirse en organizaciones con capacidad de obtener cargos a nombre propio sin ninguna barrera, sólo la electoral. Y segundo, la participación de miembros del Movimiento 19 de abril (M-19) en la Asamblea Constituyente demuestra al menos algún atisbo de intención de los tradicionales (quienes aún eran los grandes jefes del sistema) de estabilidad y apertura política; sin embargo, las dinámicas violentas intersistémicas³ parecieron no modificarse de manera trascendental luego de la implementación de la Carta Magna. Las tasas de violencia incluso aumentaron en algunos territorios -la mayoría de las víctimas perteneciendo a sectores políticos muy específicos-, y las cuales mostraron sus momentos de mayor intensidad en los noventas⁴.

Estos fenómenos (sin asumirlos como los únicos) han generado en el actual sistema político unas características que permiten pensar un sistema de partidos que finalmente logró diferenciarse del modelo bipartidista tradicional anterior (Basset, 2018), sin embargo, esto tardó más de 15 años en suceder. El clivaje liberal-conservador logró mantenerse vigente durante los noventas, y aún durante el nuevo milenio los tradicionales mantuvieron parte importante de su poderío (aunque en constante y rápido detrimento y reduciendo su influencia a los escenarios más regionales y locales); al mismo tiempo que nuevas fuerzas políticas

³ De las cuales es posible trazar sus raíces prácticamente hasta el post-Frente Nacional.

⁴ Es transversal comprender la magnitud de estos picos, tres candidatos que se encontraban realizando campaña activa a la presidencia de Colombia fueron asesinados, parte de una violencia sistémica hacia un sector específico que tuvo momentos ya bastante excepcionales a finales de los ochentas.

se establecen cada vez más en el nivel nacional, desde el establecimiento de la nueva Constitución.

Los intentos de apertura política que trajo la elección popular de alcaldes en 1988 fueron la respuesta del gobierno a una intensa movilización social que exigía la garantía de los derechos de la ciudadanía a través de una mayor capacidad de control y manejo de sus territorios (Saldías, 2018), y junto con la llegada de partidos como la Unión Patriótica y la Alianza Democrática - M19 (ambos con raíces guerrilleras), creó un escenario propicio para que las organizaciones políticas fuera del tradicionalismo pudieran pretender cargos de elección pública, y por lo tanto, lograran poder en los territorios. La competencia política, tan concentrada en lo nacional, gracias a una normatividad rígidamente centralista -que venía de la Constitución de 1886 y las políticas de la Regeneración⁵-, cambió de manera inesperada el foco a lo local transformando las dinámicas de la pugna electoral, otorgándole una importancia a las localidades que no tenían previamente y que, junto al aumento que esto causó en la influencia de los operadores locales, hizo que estos tuvieran la capacidad de competir cara a cara contra los marbetes tradicionales, a nombre propio, en sus zonas de mayor poderío.

El gran problema fue que esta competencia no se jugó limpiamente, y la violencia inmediatamente empezó a intervenir en el proceso de construcción de la descentralización política, administrativa y fiscal que pretendían las reformas aplicadas desde mediados de los ochentas. La masacre a más de 3000 miembros de la Unión Patriótica es el ejemplo más representativo, sin embargo, los afectados por la violencia fueron muchos más, haciendo de la sistemática violencia ejercida

⁵ La Regeneración fue un movimiento político que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX en cabeza del político Rafael Núñez, el cual tenía como faro la reestructuración del sistema político y la organización estatal surgida a partir del establecimiento de la Constitución de 1863, la cual fundaba a los Estados Unidos de Colombia, un Estado federado cimentado en los principios liberales. El movimiento regenerador pretendía *refundar la patria* haciendo que el Estado colombiano pasara a una organización fuertemente centralizada y muy inclinada sobre el catolicismo, dando lugar a la etapa conocida como la Hegemonía Conservadora (1886-1930). Véase Valencia Villa, H. (1987). *Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano* (No. 11). Universidad Nacional de Colombia.

por los grupos armados al margen de la ley un factor trascendental en el proceso de fundación del sistema político colombiano moderno. Es posible acercarse desde diferentes perspectivas a esta multiplicidad de fenómenos, y en una realidad como la colombiana es fundamental encontrar los puntos de quiebre, y los ejes de conexión que tienen aspectos como la violencia, la represión, el clientelismo y la realidad política.

En una primera intención se pretendía abarcar en esta investigación el proceso *extendido* de construcción del sistema multipartidista desde la Constitución de 1991 hasta el 2016, dividiéndolo en tres etapas: i) de 1991 a 2001, en donde se sentaron las bases del sistema político colombiano desde la Asamblea Constituyente; ii) de 2002 a 2010, momento en que se irrumpe el orden bipartidista tradicional en el escenario nacional por primera vez y empiezan a nacer y establecerse partidos con una independencia relativa a los tradicionales; y iii) de 2011 a 2016, siendo durante estos años que finalmente se logra establecer un sistema multipartidista por fuera de las lógicas bipartidistas tradicionales. Gran parte de la investigación realizada respondía a este formato, por lo que se revisaron autores como Rodrigo Losada, Nicolás Liendo, Jhon Bedoya y Juan Carlos Arenas en clave de la periodización previamente expuesta; sin embargo, por limitaciones de espacio y tiempo el presente trabajo se concentra en la etapa inicial del proceso de construcción del sistema de partidos.

La presente investigación pretende una aproximación histórico-teórica a los primeros pasos de la construcción del actual sistema multipartidista, para crear un marco en el cual sea posible reconocer cuáles son los efectos que tuvo el conflictivo proceso de apertura política sobre el sistema de partidos, que pasaba de un extenso bipartidismo a un naciente multipartidismo, el cual debía desarrollarse dentro de unas dinámicas de extrema violencia, alta fragmentación, y de la resignificación de los territorios en la competencia electoral, es decir, ¿cuál es el efecto de tanta violencia en el proceso?. En razón de esto, la preocupación se concentra en la primera etapa que se pretendía investigar en una primera intención (1991-2001), sin

embargo, la investigación realizada hizo necesario extender el estudio hasta 1986 para poder incluir las afectaciones que tuvo el sistema político luego del Acto Legislativo 1 de 1986, el cual reglamentaba la elección popular de alcaldes en el país, y marcó un hito inicial en el proceso de reformas políticas que pretendía abrir las barreras impuestas históricamente por el tradicionalismo.

El objetivo general de este trabajo es observar el cambio de un modelo tradicionalmente bipartidista a uno multipartidista, desde los intentos de apertura política de 1986 hasta el 2001, previo a la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República en el 2002. El primer objetivo específico es identificar los fenómenos sociopolíticos que encuadraron y definieron al sistema político, centrando la discusión en la influencia de las altas tasas de violencia política en los ochentas y noventas⁶ sobre el establecimiento del sistema de partidos reglamentado bajo la Constitución de 1991. El segundo objetivo específico es comprender el proceso de construcción del sistema de partidos colombiano luego de los cambios normativos propuestos desde el proceso de apertura política de los ochentas, y hasta entrado el nuevo milenio. El corte se realiza en el 2002 porque la llegada de un *outsider* al Ejecutivo nacional y las reformas políticas realizadas posteriormente abren un nuevo abanico de fenómenos que no es posible analizar en el espacio de este trabajo de grado.

La pretensión central de esta investigación es establecer que el proceso de construcción del sistema de partidos colombiano no fue sólo producto de los cambios normativos que pretendían la apertura del sistema, sino que hizo parte de un proceso cruzado por un fortísimo conflicto armado interno que, junto con unas estructuras políticas locales y regionales profundamente arraigadas, hicieron que el proceso efectivo de apertura administrativa, fiscal y política se viera truncado por

⁶ La violencia política es una de las grandes constantes en la historia colombiana. Francisco Gutiérrez Sanín abarca los últimos 100 años en El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010) (2014).

las estrategias asumidas por los actores que entraron a la competencia electoral a enfrentarse con los tradicionales.

La primera sección se encarga de aterrizar teórica y conceptualmente el sistema de partidos y sus componentes, sentando las bases del estudio en cuestión, para luego entrar en la metodología del trabajo, dando el proceso de recolección y utilización de la información en la investigación, y concluye con un paneo sobre los cambios que ha sufrido el sistema de partidos nacional, concentrándose en varios análisis cuantitativos realizados por la academia nacional, los cuales permiten observar la situación actual del sistema de partidos colombiano. La segunda sección presenta, de manera puntual, los fenómenos que hacen tan especial el caso colombiano: primero, se aproxima brevemente al problema de la fragmentación dentro de las estructuras partidarias tradicionales, y segundo, al constante uso de medidas represivas por parte del Estado hacia sus contendores políticos directos. Finalmente, la tercera sección hincó el diente en el problema central de la investigación, realizando una aproximación histórica y normativa de los primeros años del proceso de apertura política y construcción del sistema de partidos moderno, para después concentrarse en las estrategias utilizadas por los nuevos actores para participar en las también nuevas contiendas electorales en lo local, regional y lo nacional, cerrando con las estrategias utilizadas por los tradicionales para mantener el statu quo y su poderío sobre los territorios nacionales.

1. Para abordar los partidos colombianos.

Para comprender a los partidos políticos colombianos en el rango de tiempo que le atañe a esta investigación, es necesario entenderlos como "cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta a las elecciones y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos" (Sartori, 1980). Una de las grandes reformas políticas realizadas por la Asamblea Constituyente fue permitirles a los movimientos políticos presentar listas a las elecciones, y fue en gran medida la implementación de esta norma la causa de las múltiples

candidaturas personales presentadas a las elecciones locales, regionales y nacionales hasta entrado el nuevo milenio. Estas organizaciones, por lo tanto, funcionan dentro del modelo de los sistemas de partidos competitivos. La preocupación de este documento radica en el paso de un sistema a otro, uno bipartidista a uno multipartidista.

Este paso puede observarse en la teoría del sistema multipartidista clásico de Maurice Duverger, en donde explica cómo existe la posibilidad de pasar de un sistema bipartidista a uno multipartidista en cualquier momento. Duverger (2002), citado en Romario, García, y Fernández (2016), declara que:

“Esto se produce cuando la variable presentada como extremista-moderado, se desborda y alcanza un punto en el que no produce solo facciones en los partidos, sino auténticas escisiones, y añade que estos partidos han sido creados por la otra variable radicales-conservadores, dando lugar a radicales extremistas y moderados, y a conservadores extremistas y moderados. Esta fragmentación produce «partidos centristas» resultado de una moderación ideológica dentro del eje izquierda-derecha” (pg. 256-257)⁸.

La teoría expuesta responde a los comportamientos observados en los partidos políticos tradicionales, dando una explicación a las decisiones que dieron origen a las *escisiones* dentro de estos, y permitiendo asumir el fenómeno de la fragmentación partidista como uno de los escalones fundamentales en el proceso de construcción del sistema multipartidista actual, al mismo tiempo que da razón a las dinámicas interpartidistas que tuvieron lugar desde el post-Frente Nacional (Gutiérrez, 2007).

Asumir este paso de bipartidismo a multipartidismo como un proceso que debió ser caminado en varios pasos (los cambios que sufren las variables en la teoría duvergeriana), en vez de una ruptura inmediata causada por la modificación

⁸ Extraído de: Romario, J., García, A., & Fernández, A. (27 de Abril de 2016). *Multipartidismo*. Obtenido de Diccionario de Ciencia Política y de la Administración: <http://dcpa.wikidot.com/wiki:multipartidismo>

de las normas que institucionalizan al sistema, implica girar la mirada a los diversos fenómenos sociopolíticos que rodearon al sistema político en general, durante su metamorfosis. Por lo tanto, se entienden a los partidos políticos como las unidades integrantes de este sistema, y esto hace de las relaciones entre estas unidades parte fundamental de la materialización del estudio.

La lectura realizada al sistema de partidos colombianos por los comparativistas y expertos en partidos de la academia nacional permite asumir que sí se pasó, materialmente, de un bipartidismo a un multipartidismo. La preocupación de la academia se ha quedado constantemente en la cuantificación de las variables, usualmente a partir de índices como el número efectivo de partidos (NEP), lo cual ha permitido observar el cambio del sistema de partidos en números; pero estas observaciones dejan de lado las particularidades constantes del caso colombiano; como las complejas relaciones territoriales entre los múltiples actores políticos, o los efectos del permanente conflicto armado colombiano sobre el reordenamiento normativo del sistema político.

Algunos académicos se han preocupado por las implicaciones de la violencia en los sistemas de representación¹⁰; Eduardo Pizarro Leongómez tiene una serie de aproximaciones interesantes a la atomización partidista¹¹ y al nacimiento de las terceras fuerzas políticas a finales del siglo XX¹², estableciendo que fueron las *micro-empresas electorales* los personajes de los noventa¹³.

¹⁰ Castro, I. C., & Ortiz, C. G. (2005). Capítulo 9: la segregación de las víctimas de la violencia política. Entre el perdón y el paredón, 259-282; Cepeda, I. (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. *Revista Cetil*, 1(2), 101-112; Medina, M. (1979). Terceros partidos políticos en Colombia. *Estudios Marxistas*, (18), 3-31.

¹¹ Pizarro Leongómez, E. (2002). Atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las micro-empresas electorales.

¹² Pizarro Leongómez, E. (1997). ¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy. *Análisis político*, 31, 82-104.

¹³ Concepto fuertemente refutado en Gutiérrez, F., y Dávila, A. (2000). Paleontólogos o politólogos: ¿qué podemos decir hoy sobre los dinosaurios?, in *Revista de Estudios Sociales*, num. 6, Bogotá: Facultad de Ciencias Sociales, Uniandes/Fundación social.

El fenómeno coalicionista ha sido objeto de estudio de múltiples autores¹⁴, quienes han denotado tanto las alianzas entre legales como entre ilegales, en donde la mayoría de los múltiples actores políticos, sociales y económicos del país tienen su apartado. Asimismo, los estudios históricos realizados por autores como Rodrigo Losada Lora y Francisco Gutiérrez Sanín se utilizan para comprender la progresión de los partidos en el sistema, la represión política y social de los partidos, sus militantes y gran parte de la sociedad civil, y los fenómenos de fragmentación partidista del siglo XXI.

1.1. Cómo abordar los partidos políticos colombianos:

Para el análisis de estas variables en el escenario nacional que se pretende realizar se utilizan múltiples métodos de recolección de información y datos. En primera medida la investigación se centra en la descripción del meollo en cuestión (Hernández, 2003), enfocándose en la fase inicial del proceso de construcción del sistema de partidos colombiano actual y el contexto que rodeó a este momento a través de una revisión teórica e histórica del momento, y recurriendo a algunos modelos clásicos de la ciencia política para comprender el entorno político nacional.

Los datos se recogen principalmente de trabajos e investigaciones realizados previamente al sistema de partidos colombiano, con autores como Eduardo Pizarro, Francisco Gutiérrez y Rodrigo Losada. La aproximación que se realiza al caso se enfoca principalmente en un análisis histórico. Es importante estudiar los años previos a la Constitución de 1991, pues la inmediata alta tasa de violencia posterior a las reformas políticas implementadas en 1988 hacia los nuevos movimientos políticos de izquierda tuvo repercusiones que se ven hasta la actualidad.

Se recurre, además, a información electoral a través de datos recogidos de la Registraduría Nacional, y algunas encuestas de iniciativa privada y pública

¹⁴ Chasqueti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. Clacso; Salazar, B. P. (2008). Redes y coaliciones de legales e ilegales en Colombia.

recopilada de primera fuente por estudios previos al tema. De esta manera -y en la misma línea-, es necesario acercarse a la prensa nacional para aterrizar el contexto político y público de los momentos en cuestión. El análisis de estos datos electorales, sondeos de opinión y hechos recogidos por los medios pretende establecer no sólo una contextualización, sino también establecer un polo a tierra inicial, un tipo de diagnóstico del entorno que permita compararlo con las fases posteriores de construcción del sistema multipartidista colombiano. y funciona como referente para analizar lo sucedido en la fase inicial del proceso de construcción del sistema multipartidista colombiano. Este ejercicio fue validado por el director del trabajo de grado, a partir de trabajos como *El Antiguo Régimen y la Revolución* (de Tocqueville, 2004).

En conclusión, los datos e información recogida en esta investigación pretenden comprender los procesos que permitieron la fundación del nuevo sistema político colombiano. Para que haya algo nuevo tiene que haber algo viejo, y aunque las preguntas de este trabajo están dirigidas a lo segundo, es a causa de la coyuntura y el escenario actual que es relevante observar al pasado. La siguiente sección se encarga de un rápido paneo sobre el sistema de partidos actual, concentrado en sus actores principales, con la intención de concebir el peso y valor real de estos dentro de los procesos políticos nacionales.

1.2. Por qué abordar los partidos políticos colombianos:

Los partidos políticos colombianos son parte imperante y trascendental en el nacimiento, crecimiento y establecimiento del sistema político nacional. Los cambios que sufrieron las estructuras internas y externas de estas organizaciones durante el cierre del siglo XX hacen parte de lo que es el sistema político actual, por lo que comprender estas relaciones puede ser relevante para entender algunos de los fenómenos que han tenido lugar en lo que vamos del nuevo milenio. Esta investigación pretende ser parte en la comprensión del modelo político nacional a

través de la observación de las relaciones entre los actores que hacen parte del sistema político.

Para observar las particularidades y características del sistema político actual es necesario primero dirigir los esfuerzos al momento en que se derrumbó el modelo anterior -actualmente no se puede pensar en el bipartidismo tradicional como el clivaje fundador de la relaciones del sistema político-. Múltiples fuerzas han tomado lugares en el podio del sistema, mientras los tradicionales parecen haberse convertido en actores secundarios de una nueva obra teatral, con una nueva producción y dirección. Para entender el nuevo modelo, es preciso pensar el momento en que inició su proceso de construcción procurando responder a los múltiples fenómenos expuestos por la academia nacional.

Asumir que se llegó en una fecha específica (como usualmente se asume con el establecimiento de la Constitución de 1991, la llegada de Uribe Vélez a la presidencia en el 2002 o con la Reforma Política del 2003) lleva a conclusiones simplistas (Basset, 2018). Uribe no llegó como un *outsider*, fue un candidato respaldado por el liberalismo político tradicional. Más aún, en el 2002 el Congreso se mantenía liderado por los partidos tradicionales, aunque con una capacidad notablemente menguada ante el caudillo en la presidencia. Las múltiples fuerzas políticas y movimientos sociales que pretendían voz y voto en el gobierno desde la ola de protestas de los setentas y ochentas en el país, finalmente lograron participar en la contienda electoral luego de la nueva norma.

En el 2015, Juan Carlos Arenas y John Fredy Bedoya, en su artículo “Incidencia de los cambios en las reglas de competencia electoral sobre la nacionalización del sistema de partidos: las estrategias de los actores políticos en Antioquia, 1997-2011” examinan cómo las reformas políticas modifican el escenario de partidos en el nivel departamental. Esta perspectiva les permitió observar la fragmentación de los partidos con nuevos ojos.

Los partidos tradicionales (Partido Liberal Colombiano y Partido Conservador Colombiano) y los no tradicionales entraron en estrategias que responden a las necesidades y capacidades que tienen gracias a las estructuras que históricamente los han rodeado. Las nuevas fuerzas logran acumular éxitos significativos en algunos escenarios gracias a la mengua de las “barreras de entrada” establecidas por las modificaciones realizadas a la institucionalidad nacional; mientras que los partidos tradicionales fueron llevados a la reestructuración de sus dinámicas más locales pues “debido a su dinámica organizativa, tenían la necesidad de coordinar las acciones de un alto número de facciones, que les dieron heterogeneidad y produjeron un alto nivel de fragmentación al sistema de partidos” (Arenas y Bedoya, 2015, pg. 83).

La nacionalización (el modelo en el que se basan Arenas y Bedoya) es comprendida como un modelo de análisis de los sistemas de partidos, el cual busca explicar las dinámicas en las cuales se procesan las relaciones interpartidistas entre los diferentes niveles administrativos en relación a las elecciones nacionales. Došek (2013), citado en Arenas y Bedoya (2015) aclara:

“En su forma horizontal, se ha entendido como un sistema nacionalizado aquel en que los partidos, por lo general los más grandes, tienen apoyos electorales homogéneos en cada territorio. También se ha entendido de manera dinámica como la homogeneidad en los cambios de los apoyos electorales (o preferencias partidarias) que se dan entre una elección y otra en las diferentes unidades subnacionales. Y en una forma vertical, como la similitud de la competencia electoral en los diferentes niveles (nacionales y subnacionales) en los que se llevan a cabo elecciones, y en qué medida los partidos políticos participan en todos ellos”. (pg. 87)

Los autores establecen dos etapas en la evolución del proceso de (des)nacionalización, centrándose en estudios previos de Batlle y Puyana (2011):

I) un periodo de desnacionalización en aumento de los partidos tradicionales y no tradicionales, en razón de los procesos de descentralización

administrativa y fiscal que venía dándose desde los ochenta. Batlle y Puyana (2013) asumen que fue por el crecimiento del poder que recibieron los administradores locales (convirtiéndolos en actores) que se llevó la atención de la cúpula nacional del partido a lo subnacional, haciendo maniobrar al partido alrededor de las particularidades de cada territorio, y a las subdivisiones partidistas locales a veces a través de coaliciones (con legales o ilegales) o cambios de camiseta, fortaleciendo principalmente a los movimientos políticos y personalidades con influencia en lo local.

II) Una renacionalización del sistema, adjudicable a la Reforma Política de 2003, en donde los cambios normativos dirigieron la transformación. La reducción de múltiples listas, a una sola con opción al voto preferente, obligó a los partidos a una reestructuración de las facciones más pequeñas en organizaciones más grandes, con un mayor éxito a nivel nacional (pg. 90).

Una de las últimas aproximaciones al sistema de partidos colombiano la realiza Yann Basset en “¿Cuándo cambia un sistema de partidos? Una perspectiva de análisis electoral desde el caso de Colombia” (2018), donde reafirma la falta de capacidad de las *tercerías* (nuevos partidos, o no tradicionales) para mantenerse en el cambio de milenio al realizar una breve revisión histórica enfocada en la construcción de las bases electorales de los partidos.

Basset aclara que para 1998 el bipartidismo era a duras penas aparente. Su análisis destaca un sistema de “pequeños feudos electorales” (pg. 118) sin mayor relación los unos con los otros, negando la existencia misma de un sistema de partidos, y logrando estos afectar hasta la estructura del Senado, complicando la capacidad del gobierno de turno para organizar coaliciones estables. Luego del 2003 el comportamiento electoral logra una mayor organización territorial, *ergo* un sistema de partidos más estructurado.

Es así que el foco de su análisis se mueve del gobierno, y los cuerpos colegiados y ejecutivos de los distintos niveles administrativos, al del ámbito

electoral, pues se espera que este escenario refleje de manera más clara que el formato organizacional del sistema político nacional, entendiendo que una reestructuración del sistema de partidos no sólo se traduce en el comportamiento electoral, pues también tiende a reflejar un quiebre en la representación política, confirmando los aportes de Batlle y Puyana (2013).

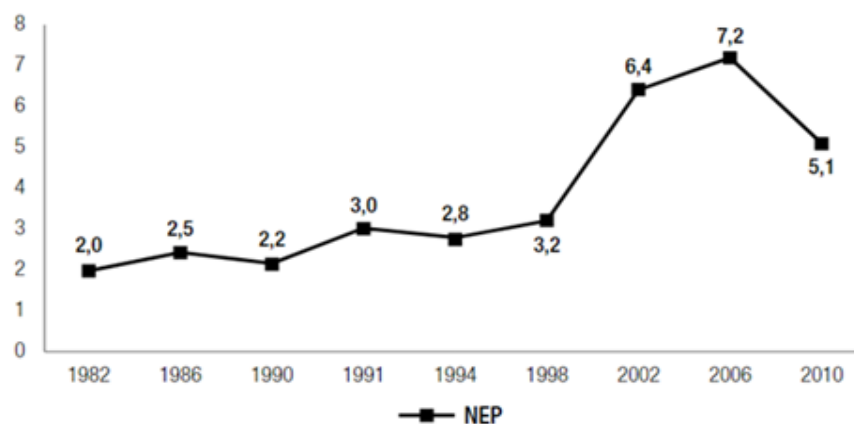
Aproximaciones al Número Efectivo de Partidos antes del 2003 permiten comparar los datos electorales de los municipios contra los de los departamentos, y estos arrojan una tendencia a la nacionalización del sistema positiva constante entre los partidos efectivos en los diferentes niveles administrativos, es decir: previo al 2003 los partidos parecían estar más alineados nacionalmente, siendo el NEP similar entre lo municipal y lo departamental (Arenas y Bedoya, 2015). Por otro lado, luego del 2003, el NEP crece de manera exponencial en lo local, mientras que en lo departamental se reduce. En otras palabras, la nacionalización de los partidos políticos era mayor antes de la reforma del 2003, así que luego del fenómeno de la hiperfragmentación de los noventas, el sistema parece buscar estabilizar las relaciones dentro de las estructuras de las nuevas organizaciones partidarias en el país; en la segunda etapa, luego de la reforma, el cambio de reglas de juego implicó una transformación de las estrategias de las subpartes locales de los nuevos actores políticos, y la drástica reducción del NEP implicó, por un lado, la aglomeración de múltiples pequeñas organizaciones (las coaliciones terminaron fundadas en cercanía ideológica, geográfica o por simples alianzas clientelares) en partidos de mayor envergadura, y por el otro, la absorción de algunos otros pequeños partidos por los nuevos actores que Las consecuencias más evidentes fueron:

“i) facciones que se convirtieron en partidos de aspiraciones nacionales (e.g. Cambio Radical y Equipo Colombia), ii) la depuración de los partidos Liberal y Conservador, iii) el surgimiento de movimientos locales que parecían distanciarse de las líneas tradicionales (incluidos los movimientos significativos de ciudadanos) y iv) la aparición de nuevas organizaciones como resultado de coaliciones entre fuerzas regionales o partidarias que se unen para crear un

nuevo partido (e.g. Polo Democrático Alternativo y el Partido Social de la Unidad Nacional)” (Ibid, pg. 94).

Otros análisis realizados sobre el NEP, permiten observar que efectivamente, en las elecciones de Congreso del 2006 el NEP superó incluso al de las del 2002, pasando de 6,4 a 7,2, respectivamente (Losada y Liendo, 2015). Desde una mirada más panorámica, de 1986 a 2010 el número creció en casi tres unidades, pasando de 2,5 a 5,1 partidos efectivos. Esta primera observación permite ver muy puntualmente el crecimiento del sistema de partidos luego de las reformas de apertura política de los ochentas, además de hacer tangible el proceso al observar el paulatino aumento del NEP durante los noventas, junto con la explosión de *micropartidos* del nuevo milenio, y la aparente estabilización en años posteriores a la reforma del 2003.

Ilustración 1



(Batlle y Puyana, 2015, p. 77)

La reforma de 2003 pareció controlar la creación de partidos nuevos, y esto llevó a que el número de partidos se redujera de manera sustancial: 41 partidos en el 2002 lograron escaños en el Senado, pasando a sólo 12 partidos en el 2006. Es importante recordar que los datos ofrecidos por el análisis del NEP realizado por Batlle y Puyana (2013) concluyeron todo lo contrario, pues el NEP aumentó de 2002

a 2006, demostrando los limitantes y variabilidad de los indicadores rasos para explicar las complejidades de la realidad política nacional.

Una primera explicación de la *operación avispa* se encuentra en la alta volatilidad sistémica que sufrió el sistema de partidos en su primera gran reforma luego del asentamiento de la Constitución de 1991. Entre las elecciones de 2002 y 2006 se registró un “cambio de preferencias partidarias” (Losada y Liendo, 2015, pg. 112) del 66%, lo que quiere decir más de la mitad del mercado electoral estaba reestructurándose bajo los nuevos marbetes políticos que ofrecía el sistema. No obstante, estos nuevos actores estaban, en su mayoría, relacionados con alguno de los dos tradicionales, así que las preferencias partidarias realmente no cambiaron, observándolas en su sentido más ideológico, sino que cambió el título que se ponía sobre la organización a la que se le otorgaba el voto.

Losada y Liendo concluyen:

“De los votos que han viajado de partido, o que han cruzado la frontera entre la abstención y la participación, en cualquiera de los dos sentidos, los Nuevos Partidos –aun cuando significativos en cantidad– no han logrado capturar tanto la simpatía de los electores como para reemplazar el espacio de los partidos tradicionales –PC y PL–.” (pg. 115).

No obstante, al dirigir la mirada al Senado, pensando en una generalidad nacional y dejando de lado las particularidades del escenario regional/local, se observa que durante el siglo XX los votos que se fugaron de los partidos tradicionales no se dirigieron a fuerzas alternativas, sino que se concentraron en las facciones del tradicionalismo, y esto, en cierta manera, se mantiene luego del 2002, pues aunque los votos de los partidos Liberal y Conservador se reducen a menos de la mitad, los partidos que lograron establecerse gracias al apoyo de los tradicionales parecen obtener este mercado electoral (Basset, 2018).

Antes del 2002, además, la normatividad permitía que “cada político se presenta[ra] de forma casi personal en la práctica. El resultado fue un

desdibujamiento de los partidos en un sistema hiperpersonalizado más que la sustitución de un sistema de partidos por otro” (*Ibíd*, pg. 109), y la dirección de los avances causados por la reforma política de 2003 obligó a una mayor cohesión en el sistema electoral y llevó a la reagrupación de los partidos en actores relevantes, sin embargo, frágiles y fragmentados.

La explicación es que, como se mencionó previamente, en esta primera etapa previa a la reforma, los partidos –aunque víctimas de faccionalismos personalistas– lograban articularse de manera ordenada de lo regional a lo nacional bidireccionalmente. Mientras que luego del 2003 los “cambios normativos implicaron cambios en la estrategia planeada por los actores para seguir en competencia” (Arenas y Bedoya, 2015, pg. 94). Las facciones deben tomar el manto de partido, hay una depuración de los partidos tradicionales, los movimientos locales ven un resurgimiento, y nuevos partidos aparecen a causa de las coaliciones entre fuerzas regionales. El nacimiento del Partido de la U, encabezado por el en ese entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con el apoyo de Juan Manuel Santos (uno de los grandes delfines colombianos), es ejemplo de una facción liberal (ambos Uribe y Santos eran liberales) que toma su propia bandera política en mano, luego de la llegada de un político que hacía su camino desde la política local antioqueña.

Parte de la reglamentación del Acto Legislativo 01 de 2003 no fue aplicada hasta las elecciones presidenciales, de Senado y Cámara de Representantes del 2006, en donde los liberales y conservadores inician una estabilización alrededor del 20% en los cuerpos colegiados nacionales (Basset, 2018). Como ya es claro, los *micropartidos* desaparecieron y las fuerzas políticas nuevas que lograron mantenerse en competencia se fortalecieron exponencialmente, lo que les permitió enfrentarse a los tradicionales.

En el 2006 la nueva estructura de partidos, antes que fundarse en una nueva base, parece buscar el antiguo eje liberal-conservador. Sin embargo, los apoyos del liberalismo se quebraron al momento en que una parte se convirtió en oposición al

gobierno, y la otra decidió cobijarse bajo el gobierno del momento; mientras que los conservadores se aglutinaron bajo el oficialismo, y por lo tanto, lograron un aumento en la cohesión interna.

Nace en este contexto el Polo Democrático Alternativo como única opción electoral de izquierda, y utiliza el argumento de la oposición para crear un movimiento con una consistencia considerablemente alta. Se establece así un “segundo eje [que] podría ser interpretado como la aparición de un eje izquierda-derecha, si no fuera por la aparente desideologización de las formaciones que representan a la «derecha» en el segundo componente” (*Ibíd*, pg. 119). De igual manera, las categorías urbano-rural también aparentan ser un nuevo centro del clivaje, pues es en los centros urbanos donde la izquierda encontró su nicho, mientras que lo rural se concentró en la base de los “caciquismos rurales” (*Ibídem*). El sistema parece consolidarse, finalmente, en el 2010 con la aparición de un eje oficialismo (santistas) vs. los demás partidos (uribistas), en palabras del autor.

La diferenciación rural-urbano también encuentra una subdivisión dentro de lo rural, dependiendo del territorio y las características específicas que le atañen. En el Caquetá, Putumayo, Arauca, Casanare y el Norte de Santander la guerrilla tuvo mayor presencia, y curiosamente estos departamentos se alinearon con el *centro*, ofreciendo apoyos importantes al Centro Democrático, pese a que también se inclinaron a la oposición de izquierda bajo el manto del Polo Democrático y la Alianza Verde. Las costas, mucho más afectadas por el paramilitarismo, tendieron a la *periferia*.

Para el 2011 el sistema puede considerarse relativamente estable. Luego de una inclinación hacia la desnacionalización después del 2003, la reforma hizo que la estrategia de acumular múltiples facciones bajo una gran bandera nacional fuese inefectiva. El número de partidos se redujo hasta la última fecha, pero esto no implicó una mayor nacionalización del sistema, aunque se hayan consolidado los partidos que compiten en todos los niveles (Arenas y Bedoya, 2015).

Basset afirma que en el 2014 el clivaje liberal-conservador parece haber sido reemplazado por el centro-periferia, empujando fuera del marco rector por primera vez al tradicionalismo político. Reconocer todos los factores que tuvo en cuenta Basset es complicado por la complejidad del modelo ACP (que es el que utiliza para realizar su escrito) y la falta de conocimiento sobre las variables que utilizó para su análisis. Sin embargo, sus conclusiones otorgan un nuevo esqueleto al análisis de sistema de partidos al pensar, por primera vez, un modelo de partidos que se funda en los quiebres territoriales.

Luego de un extenso y muy completo análisis, Arenas y Bedoya resuelven que:

“Las restricciones impuestas por las normas indujeron el proceso de depuración de los partidos tradicionales, comenzando desde lo local, reconfigurando el sistema a partir del reacomodo de las facciones en nuevos partidos y en coaliciones ad hoc (movimientos significativos de ciudadanos), lo que en conjunto incrementó el número de competidores en este nivel, mientras que en los otros se mantenía estable o se reducía” (pg. 106).

En suma, el escenario de los partidos políticos actuales y las modificaciones que han sufrido, en términos cuantitativos y cualitativos, hacen que sea fácil aceptar el cambio efectivo de un sistema de partidos bipartidista a uno claramente multipartidista. Las fuerzas tradicionales del bipartidismo ya no son ni la sombra de lo que llegaron a ser el siglo pasado, y el sistema moderno se encuentra instaurado en múltiples fuerzas, diferenciadas más por su zona de influencia que por sus contrastes ideológicos. Ahora, es pertinente ahondar en las características específicas del caso colombiano, por fuera de los datos y las cifras electorales y más en las realidades territoriales del país.

2. La particularidad colombiana.

Los estudios del sistema de partidos colombiano tienen un grueso importante en el análisis del modelo bipartidista previo al siglo XXI, pero el nuevo

multipartidismo se encuentra algo relegado –aunque no olvidado– por la academia nacional. Múltiples autores con una extensa trayectoria han expresado su interés en las relaciones interpartidistas e intrapartidistas modernas, exponiendo la fragmentación política de los primeros años del milenio, los desarrollos de los partidos políticos conforme a las reformas políticas realizadas y el establecimiento de nuevas fuerzas políticas que rompieron por completo el histórico establecimiento político.

Lo especial del caso colombiano es la riqueza de las variables que confluyen en el territorio. Durante su historia, la mayoría de las grandes reformas constitucionales venían acompañadas de alguna manera por algún tipo de conflicto armado. Desde las múltiples guerras civiles del siglo XIX hasta la lucha contra la insurgencia armada, ya sean los grupos liberales de la primera mitad del siglo XX o las izquierdas armadas de la segunda mitad, la violencia ha sido una constante en la historia del país. Y sin embargo, Colombia es una de las democracias más estables de la región.

El armatoste político nacional ha estado históricamente fundado en un modelo bipartidista, con un gobierno que fue rígidamente centralista la mayoría del siglo pasado a causa de las reformas constitucionales de finales del siglo XIX. Las dinámicas de relaciones internas que tenían los partidos políticos tradicionales que respondían a este modelo político se vieron interrumpidas al momento en que el escenario local se hizo relevante electoralmente, es decir, desde los primeros intentos de apertura política en el país.

Bajo esta línea, Francisco Gutiérrez Sanín establece relaciones muchas veces lógicas, y por lo tanto poco estudiadas, entre la transformación del sistema de partidos nacional, y el conflicto armado, diferenciando el nivel nacional, regional y local. Aunque generalmente como un apartado dentro de sus publicaciones más importantes, un capítulo o breves menciones a través de la mayoría de su obra, sin dejar de lado la transversalidad del caso.

Varios conceptos relevantes tienen un espacio breve en la introducción de su artículo “Una relación especial: privatización de la democracia, élites vulnerables y sistema político colombiano (1982-2002)” (2012), donde simplifica a cada punto, respectivamente: “a) Colombia no es una democracia: es un régimen terrorista que acaba con la oposición para mantener un sistema de exclusiones desde arriba; b) las instituciones colombianas han sido una víctima más de la violencia paramilitar; y c) el paramilitarismo obedece a la insurgencia de élites locales y regionales contra procesos de paz impulsados desde arriba” (pg. 97).

En el punto a) rebatiendo a Archer quien establece que Colombia, fuera de todo, es una democracia que califican como “*besieged*¹⁸” (en Mainwaring y Scully, 1995, pg. 179-182); debate que se permite observar más específicamente en los párrafos siguientes del artículo. En el punto b) ofreciendo una de las posibles relaciones dentro del fenómeno de la violencia paramilitar y los sistemas políticos subregionales (y sus dinámicas clientelistas prácticamente impuestas, pero tradicionalizadas). Y en el c) detallando una aproximación casi material-histórica a la raíz de esta violencia en los procesos de modificación de las élites locales durante la violencia, y el impacto de las primeras reformas aplicadas en lo local para la apertura del sistema político nacional.

El artículo toma otra dirección, sin embargo, muchas de estas ideas reciben un tratamiento dirigido a sus factores más estructurales en “El orangután con sacoleva: Democracia y represión en Colombia (1910-2010)” (2014), en donde busca concebir qué tipo de fenómenos fueron los que hicieron que una de las democracias más estables de la región fuera al mismo tiempo la víctima de una violencia represiva tan constante y abrumadoramente alta con respecto a los países con las dictaduras más fuertes y cerradas.

Otros autores, como Margarita Batlle y José Ricardo Puyana, se concentran en realizar estudios que tienen como eje conductor la información electoral. El

¹⁸ Traducido como “democracia asediada” en la versión hispana.

fenómeno de la fragmentación política -uno de los temas tocados por los autores- desde el principio de la primera década del siglo XXI uno de los temas de mayor interés.

En “Reformas políticas y partidos en Colombia: cuando el cambio es la regla” (2013), luego de un breve paneo histórico de los aportes de los trabajos previos realizados en el tema, se adentran en las consecuencias que tuvieron las reformas sobre fenómenos electorales que parecían normalizarse cada vez más desde la imposición de la Constitución de 1991 y los procesos de apertura política que venían desde el gobierno de Virgilio Barco en 1986. Los autores encuentran uno de los meollos en la fragmentación interna que venía desarrollándose desde el modelo bipartidista en la multiplicidad de listas presentadas a nombre de pequeños caudillos y élites políticas con poder en los niveles más locales y regionales.

Este capítulo pretende definir dos problemas: el problema de la fragmentación, y el problema de la represión. Ambos transversales en la construcción del sistema político colombiano moderno, el primero dirigido a las estructuras de los partidos, y el segundo con respecto a las prácticas de los actores políticos.

2.1. El problema de la fragmentación:

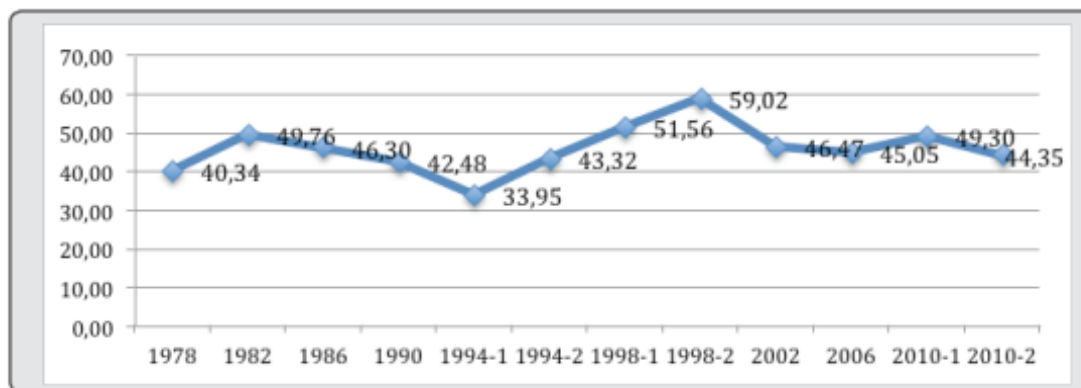
Cuando un Estado es profundamente centralizado (como lo fue el colombiano durante la mayoría del siglo XX), las periferias políticas y administrativas son difícilmente reguladas desde el gobierno central (Cárdenas y Restrepo, 2004), por lo que las relaciones entre el gobierno central colombiano y los gobiernos municipales estaban profundamente intervenidas (y básicamente controladas en su totalidad) por las estructuras internas de los partidos políticos tradicionales (Gutiérrez, 2007). El sistema otorgó, en 1991, una serie de incentivos que le ofreció la capacidad de independizarse a los actores con poder en lo subnacional, de alzar una propia bandera que le otorgaría mayores beneficios electorales y de influencia sobre el sistema.

Sin embargo, análisis cuantitativos realizados sobre el fenómeno de la fragmentación, del cual fueron víctima los partidos tradicionales durante el proceso de cambio del sistema de partidos, establecen que este problema no es algo que haya llegado a causa de (o si quiera con) la Constitución de 1991, pues existen datos muy específicos que demuestran la existencia de cantidades exorbitantes de pequeñas células al interior de los partidos tradicionales desde los setentas, y las dinámicas que regían la creación de estas fracciones (al menos en el caso liberal) se mantuvieron relativamente constantes hasta finales de los noventas, sin ninguna variación representativa causada por la implementación de la nueva Constitución (Gutiérrez, 2007, pg. 310-331).

Las múltiples facciones internas de los partidos tradicionales luego del Frente Nacional terminaron funcionando como las plataformas administrativas en los territorios, mas no el Estado en sí. Por esta razón, las relaciones gubernamentales entre niveles administrativos estaban profundamente permeadas por las lógicas clientelistas que rigen las relaciones dentro de los partidos. “A medida que se desarrollaban redes personales de influencia política en las provincias, el poder político se fraccionaba cada vez más y los líderes nacionales de los partidos y de las organizaciones se encontraban cada vez más marginados”. (Archer, pg. 145), y así “la declinación en la autoridad de las élites partidarias mermó la unidad partidaria y el casi incontrolable fraccionamiento interno y la división del Estado en enclaves pequeños y hostiles dificultaron enormemente la gobernabilidad” (pg. 146).

El establecimiento de la Carta Magna de 1991 cumplió su cometido inicial de ampliar el número de partidos, triplicándolos sólo un año después, aunque la mayoría de estos naufragaron, no logrando elegir a al menos uno de sus candidatos (Losada y Liendo, 2015, pg. 114). La renovación partidista (sin tener en cuenta su espectro representativo) fue abrumadora de 1994 a 2001, y en este mismo lapso de tiempo, se registraron algunas de las tasas de participación más altas desde el Frente Nacional.

Ilustración 2. Porcentaje de participación electoral en las elecciones presidenciales en Colombia (1978-2010)



(Barrero, Liendo, Mejía y Orjuela, 2013)

Dato importante es que ninguno de los cerca de 100 nuevos partidos establecidos en la década de los noventa logró competir en dos o más elecciones sucesivas, y de los 55 partidos que nacen en los primeros años del nuevo milenio solamente dos partidos (Cambio Radical y MIRA¹⁹) han logrado mantenerse por tres elecciones consecutivas. Y algo que puede considerarse aún más importante es el hecho que, como concluyen los autores: “en las dos décadas aquí analizadas no ha surgido un solo partido que, de manera programática, coherente y clara, haya ofrecido una alternativa de gobierno. El juego político es eminentemente pragmático y personalista” (Losada y Liendo, 2015, pg. 110).

La finalización del sistema bipartidista, pues, no puede ser ubicada en un punto específico. Es equivocado asumir que con las reformas realizadas en la Constituyente el sistema de partidos se transformó a un multipartidismo sano y andante. Es posible explicarlo por la laxitud de las reglas electorales impuestas por estas primeras modificaciones al sistema político desde la norma, los cuales diseminaron nuevos partidos, pero redujeron la participación electoral. Sin embargo, esta diseminación de partidos no implicó una mejoría en la calidad del sistema

¹⁹ Es posible incluir al Partido Social de Unidad Nacional, que se fundó en el 2005.

político, ni la fuerza de los nuevos actores fue adecuada para quebrar el predominio del tradicionalismo político, hasta el 2002.

2.2. El problema de la represión:

En una preliminar discusión en su artículo de 2012 -mencionado en la introducción del capítulo-, Gutiérrez afirmaba que no se puede pensar al país como uno bajo un régimen democrático, sino bajo uno terrorista que “acaba con la oposición para mantener un sistema de exclusiones desde arriba” (pg. 100). Una afirmación corta pero contundente, que permite realizar una más amplia observación de no sólo la comprensión de la democracia colombiana, sino una que incluya a un actor violento con las características específicas de los paramilitares durante los ochentas y noventas frente a un sistema político debilitado, históricamente cerrado, y con más actores y fenómenos irregulares que requieren su atención.

Pese a sus apreciaciones iniciales, en el Orangután con Sacoleva (2014), parece hacer las paces con Archer, calificando al régimen nacional como una “democracia anómala”²⁰. Abarcando gran parte de la discusión inicial de su libro, y recurriendo a las definiciones más formales (Downs, 1957; Schumpeter, 2008; entre otros), concernientes a los esquemas institucionales y la rotación de las élites políticas en el poder con respecto a elecciones, la libertad de los medios de comunicación, y la organización de un sistema con pesos y contrapesos (Gutiérrez, 2014, pg. 15). El sistema político colombiano ha sido relativamente estable cuando se piensa en el régimen que lo regula.

El país en ningún momento de su historia sufrió cierres tan drásticos como los de las dictaduras del Cono Sur del continente (El único momento destacables es el cierre del Congreso entre 1949 y 1959, durante la dictablanda de Rojas Pinilla y hasta la instauración de la Junta de Transición). Sin embargo, las tasas de

²⁰ Conceptualización que puede enfrentarse con la de *democracia asediada*, planteada en Scully, T. R. (1995). *Building democratic institutions: Party systems in Latin America*. Stanford University Press.

violencia política son excepcionalmente altas en comparación con los momentos de más fuerte dictadura en los países vecinos. La anomalía colombiana es la convivencia de una de las más estables democracias de la región (y el mundo) con momentos de brutal represión política.

Por lo tanto, la represión la comprende desde Stohl y López (1984), quienes la definen como “el uso o la amenaza de uso de la fuerza por las autoridades del Estado o quienes las apoyan, contra opositores o potenciales opositores, para impedir, debilitar o prevenir su capacidad de oposición”²¹. Cuando la represión tiene un “contenido explícitamente eliminacionista, en la medida en que se dirige contra unos blancos concretos escogidos ya sea a nivel ideológico u operacional para su destrucción y/o expropiación” (Gutiérrez, 2014, p. 19) se considera exterminadora. El país ha pasado por más de 100 años de represión exterminadora dirigida a actores muy específicos del espectro político, ya fuese liberal, conservador, o comunista (*Ibíd*). Desde los chulavitas hasta los grupos de autodefensas campesinas -y aún desde las múltiples insurgencias que dieron lugar a las guerras civiles del siglo XIX-, gran parte de los participantes de las dinámicas violentas en el país tienen alianzas con el Estado, haciendo del uso de la represión una práctica admitida por gobierno nacional, y hasta sistemáticamente auspiciada por este.

Así, es posible asumir que las élites políticas en el territorio colombiano tienen el uso de la violencia dentro de sus estrategias de acción política. Los operadores políticos locales solían ser al mismo tiempo grandes terratenientes y hacer parte de las élites económicas municipales; por lo que los procesos de apertura política, la resignificación de la competencia electoral, y la entrada de nuevos actores al sistema pareció amenazarlos directamente. Gutiérrez define a estos actores en riesgo como “élites vulnerables”, entendiéndolas como aquellas “cuyo aparato productivo está vinculado a economías que tienen un importante componente coercitivo y que enfrentan problemas de seguridad que, por razones estructurales o

²¹ Citados en Sanín, F. G. (2014). *El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)*. IEPRI. Pg. 7

contingentes, no pueden ser respondidos eficazmente por los aparatos del Estado” (*Ibíd*, p. 386). Las capacidades que tenían estas *élites vulnerables* sobre sus territorios les permitieron incurrir en el uso de represión exterminadora para mantenerse en el poder.

Gutiérrez explica que las brechas que existen entre las fracciones y facciones sartorianas (las primeras correspondiendo en mayor medida al Partido Liberal y las segundas al Partido Conservador) y la cúpula central de los partidos tradicionales fueron lo suficientemente profundas para colapsar el sistema político²². Se refiere a esto como *centrismo político*, y lo comprende como “la enorme distancia - ideológica, y en punto a su relación con las prácticas represivas- que el sistema político admite entre miembros de una misma facción” (*Ibíd*, pg. 25). Por lo tanto, los actores políticos que se encuentran más próximos los unos de otros pueden coordinarse sin renunciar a su partido. Gutiérrez establece que “la especificidad del centrismo colombiano es incluir de manera estructural –esto es, por diseño institucional– a agentes con acceso a armas y a especialistas en la violencia” (*Ibíd*, p. 26) y que esto en ningún momento desestabilizó al régimen democrático colombiano.

En últimas, ambos problemas son transversales en el proceso de construcción del sistema de partidos colombiano. La fragmentación es la base de los problemas de articulación de las fuerzas políticas nacidas de los tradicionales, y las prácticas represivas fueron las que lograron terminar de quebrar las nacientes organizaciones de oposición que se imponían desde lo local. La sección que viene pretende aproximarse históricamente a los fenómenos, enfocándose en el proceso en sí de los primeros pasos de la construcción del sistema de partidos nacional.

²² El presidente Andrés Pastrana afirmó que había 263 partidos en el país para el 2000. El número es exagerado. El CNE reportó la existencia de 58 partidos políticos funcionando a nivel nacional (El Tiempo, 2000).

3. Violencia política y apertura democrática.

Las últimas décadas del siglo XX en Colombia fueron especialmente violentas, en parte a causa de los múltiples actores que nacían o se estaban estableciendo en el escenario nacional. El narcotráfico se encontraba en su auge luego de los setentas, mientras que los grupos armados guerrilleros y paramilitares lograron su más alto poderío desde mediados de los ochentas y hasta principios del nuevo milenio. Las dinámicas participativas en los territorios se estaban modificando gracias a las reformas al sistema político que permitían la elección de alcaldes desde los ochentas y gobernadores en los noventas, por lo que la capacidad electoral de lo local se encontraba en un proceso de fortalecimiento con la frente dirigida hacia el tradicional establecimiento controlado desde la cúpula nacional.

La entrada a los noventas es, en sí, un fenómeno que analizar. La existencia de nuevas fuerzas políticas nacidas de los procesos de paz realizados por los gobiernos previos abrió una ruta de entrada para una nueva tendencia política en el país. Los actores políticos ya no eran sólo *políticos*, pues el gobierno debió empezar a entenderse con guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, y con sus propios operadores locales, para articular sus políticas en el territorio nacional. Claramente las relaciones del Estado con los actores recién descritos cambiaban de caso a caso, desde una ofensiva militar frontal hasta negociaciones y conversaciones pseudo-diplomáticas (Gutiérrez, 2014).

Las relaciones entre uno y otro de estos nuevos actores también hacen parte del nuevo ramo de preocupaciones, pues al compartir el escenario en que estos se movían (usualmente en los municipios y las regiones, subiendo de nivel conforme pasaba el tiempo) interactuaban constantemente, para bien o para mal. Gutiérrez (2014) explica de manera elocuente cómo los paramilitares fueron una respuesta de las élites económicas locales para enfrentar la amenaza de la insurgencia izquierdista, quienes habían adoptado el secuestro y la extorsión como algunas de sus principales dinámicas para financiar su guerra contra el Estado.

Estas élites económicas hacen parte de la categoría de élite vulnerable que se aclaró desde el capítulo anterior, pues eran estas las que más afectadas se veían por la cruzada emprendida por la insurgencia colombiana, desde su brazo armado, hasta la arena electoral, en donde pretendían competir bajo la etiqueta de la Unión Patriótica (Valencia, 2009). Esta iniciativa política logró fortalecerse al integrar en sus redes a una parte importante de la población campesina de algunos municipios pequeños y medianos del país, teniendo en cuenta la complejísima realidad de los fenómenos alrededor de la tierra y los baldíos en el país²³. “Las elecciones locales y al Congreso fueron realizadas en 1988, y en estas la Unión Patriótica logró hacerse con 24 diputados provinciales y 275 representantes municipales en el nivel local, en adición a los 4 senadores y 4 representantes a la Cámara -incluyendo a dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), Iván Márquez y Braulio Herrera- elegidos nacionalmente”²⁴ (Leech, 2011, p. 28).

La premisa de esta primera sección será la siguiente: las élites vulnerables, al encontrarse amenazadas y recurrir a estrategias de seguridad privada (representadas principalmente por las autodefensas paramilitares) utilizaron la capacidad que le ofrecían estas nuevas estructuras para reprimir desde su nacimiento el establecimiento de fuerzas de izquierda en sus territorios. Es importante tener pendiente en el avance del capítulo que:

a) La represión a las nuevas fuerzas políticas a través de la violencia directa viene dándose desde el principio del siglo XX, con dos grandes etapas de represión (Gutiérrez, 2014). El presente se concentra en parte de la segunda etapa de lo que Gutiérrez llama “represión exterminadora” (pg. 19-20),

²³ Un fenómeno que no hace parte del núcleo de esta investigación porque su complejidad histórica, social y económica requeriría un espacio mucho mayor. Catherine Legrand (1988) realiza un análisis histórico que más que pertinente, es necesario.

²⁴ Traducción no oficial.

enfocándose en la violencia ejercida por cuerpos paramilitares desde 1986 hasta el 2001²⁵.

b) Los grupos paramilitares no pueden considerarse como un actor político hasta finales del siglo XX. Desde su nacimiento estos cuerpos fueron concebidos más como una agencia de vigilancia privada para los terratenientes que como una expresión política por las armas. Este papel no aparentó ser de su interés durante el siglo XX; parecían más interesados en las alianzas con las fuerzas políticas y económicas locales.

c) Aunque la izquierda logró un primer avance relativamente fuerte en algunos territorios, esto no logra mantenerse como una tendencia representativa a través de los años. Los movimientos políticos representativos de la izquierda eran menores en tamaño y cantidad que sus contrapartes tradicionales, quienes mantenían su mayoría a través de las facciones liberales y las fracciones conservadoras.

Se divide la sección de la siguiente manera: en una primera parte se realiza una aproximación al sistema político colombiano que rodeó a la Constitución de 1991, estableciendo sus premisas históricas y los fenómenos que venían desarrollándose desde los setentas en el país. Después, se ahonda en los procesos que sufrieron los actores políticos locales desde los intentos de apertura política del país, para finalmente observar cómo fueron utilizadas las prácticas represivas como herramienta en estos procesos.

3.1. El sistema *político* colombiano en la pre-constituyente:

Luego de la Asamblea Constituyente en 1991, se esperaba que el sistema de partidos terminara de asegurar el proceso de apertura democrática que venía dándose desde la década de los ochentas. Aun así, las modificaciones normativas

²⁵ No porque en este momento se detenga la violencia paramilitar, sino porque toma una perspectiva diferente que se pretende explicar en futuros estudios y aproximaciones al problema.

que establecía la nueva Carta, en el tema específico de partidos políticos no eran especialmente trascendentales. Durante la Asamblea, los viejos y los nuevos debieron llegar a acuerdos y el poner límites a las organizaciones partidistas era contrario a la inclusión sociopolítica que tanto aclamaba la nueva norma. A los recién llegados no les servía que existieran barreras para crear plataformas políticas, y a los tradicionales poco les interesaba. Dentro de los avances más representativos se incluía la capacidad de las organizaciones de tener acceso a los medios de comunicación (Gutiérrez, 2007, p. 256). Algo que pareciera superficial, cuando se piensa el estandarte que llevaba puesto la Constitución²⁶, sin embargo fue una de las solicitudes directas de las nuevas fuerzas.

El sistema de partidos, igualmente, demoró en mostrar atisbos de ser un multipartidismo establecido. Es insustentable pensar que 150 años de historia republicana bipartidista serían reestructuradas de manera tajante desde lo normativo, manteniendo vivo aún el espíritu santanderista y esperando que las normas cambien las realidades. Los procesos de apertura democrática y política venían dándose desde los gobiernos de Betancur y Barco, antes de la Constitución, y no mostraron resultados relevantes en lo nacional hasta entrado el nuevo siglo, poco más de 10 años después del establecimiento de la nueva ley de leyes

Al proceso de apertura política y democrática se le puede poner casi un punto de partida, desde lo normativo: el Acto Legislativo 1 de 1986 (Velásquez, 2018), en dónde se estableció que...

... “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros, Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial”.

²⁶ Sin embargo, esta era una de las principales solicitudes de los nuevos movimientos políticos. Es superficial en el punto en que se pensaría que al ser la gran reforma política, la cual nació en parte por los intentos de apertura política del Estado, tendría cambios mucho más estructurales.

Este primer hito pretendía, como primera medida, establecer un puente entre la ciudadanía y el Estado, para así fortalecer las relaciones y legitimar a los gobiernos locales sobre sus territorios.

Esto no sucedió, en gran parte debido a que elegir a los gobernantes inmediatos no es suficiente. Es necesario un proceso de descentralización administrativa y fiscal, el cual sólo logró obtener cierto protagonismo desde 1991, en donde se pensaba responder a las problemáticas que venían en aumento desde, prácticamente, la finalización del Frente Nacional (Archer, 1995).

La figura del alcalde llegó al escrutinio del mercado electoral en marzo de 1988, abriendo un nuevo escenario de competencia política en lo local. Los alcaldes lograron ser elegidos, pero con una capacidad mermada de gobierno sobre sus territorios, siendo víctimas de un gobierno fundado -en algunos puntos fundamentales del proceso administrativo- en estructuras clientelares que habían logrado convertirse en los piñones (o como mínimo, los ejes) del sistema de gobierno nacional (Dávila y Leal, 2010). Sus funciones, por lo tanto, se mantuvieron profundamente dependientes al gobierno central, y lo que se concebía como prioridad para el territorio y la administración municipal no tenía cabida en los planes de desarrollo nacionales (Velázquez, 2018).

La articulación administrativa y fiscal estuvo tan demorada como la política. Los partidos se encontraban tan quebrados como el sistema de gobierno nacional, contaminado de múltiples fenómenos que menguaban su óptimo desarrollo. Los problemas de fragmentación interna no permitían el fortalecimiento de las estructuras partidistas al perpetuar la división entre los diversos niveles administrativos nacionales. Los partidos tenían dinámicas muy diferenciadas conforme disminuía de tamaño la división territorial. El Partido Conservador nacional era diferente a las múltiples fracciones que podía tener en los niveles locales, pero al menos estas se mantenían atadas de una u otra manera a la directriz nacional;

en el caso de los liberales el problema era más tajante, las facciones eran más indisciplinadas y no lograban cohesión de ninguna manera (Gutiérrez, 2007, p. 316).

El sistema político nacional tenía como foco la apertura democrática, y su meta era un sistema multipartidista; sin embargo, los partidos tradicionales tenían quiebres muy profundos, el sistema político se abrió a medias durante los ochentas y la competencia electoral iba tomando viejos caminos ya conocidos por la historia nacional.

Es necesario tener en cuenta que el bipartidismo en el país logró crear una base lo suficientemente amplia para asumir que una inmensa mayoría de la población vestía la bandera roja o azul. La diferencia recaía en las facciones de las que hacían parte, y estas trabajaban sobre todo de manera regional o local (Arenas y Bedoya, 2015). Las facciones eran las que otorgaban el puente de comunicación entre el gobierno central y el gobierno municipal antes de que la figura del alcalde y todo el proceso de descentralización fuera implementado en el país, así que al otorgar incentivos a la competencia a estas estructuras, las cabezas de las fuerzas políticas locales buscaron entrar en las arenas electorales, el problema recaía en que había más muchos más competidores que sitios en el podio, y cada vez más las nuevas reglas alentaban el ingreso de nuevos actores (Gutiérrez, 2007, p. 294).

Y mientras el tradicionalismo vivía esta transformación en sus vías de hecho, la izquierda colombiana se encontraba en su propio proceso. Las FARC-EP estaban buscando participar a la contienda electoral desde mediados de los ochentas bajo el manto de la Unión Patriótica, un partido recién creado que buscaba ser un brazo electoral de su lucha armada. La entrada de este nuevo actor, uno de los primeros en nacer completamente fuera del oficialismo (Cárdenas, 2016), junto con el proceso de desmovilización del M-19 que tuvo lugar años después, y que desembocó en la Alianza Democrática M-19 (la AD-M19 fue uno de los grandes actores de, al menos, principios de los noventas), aparentaba cierto aumento de la

organización electoral de izquierda en Colombia. Sin embargo, aún era necesario satisfacer la última sartoriana, obtener cargos de elección popular.

Los nuevos incentivos presentados por el Acto Legislativo 01 de 1986 viraron de manera drástica los ejes de competencia de lo nacional a lo local, dándole paso a dinámicas de competencia directa entre una incipiente izquierda y una desarticulada derecha, representada en el tradicionalismo. Es en este escenario (durante los últimos años de los ochentas) en donde el problema de la fragmentación de los tradicionales choca con una izquierda que ingresa a las arenas electorales mientras mantiene su frente armado, al mismo tiempo que el gobierno central da los primeros pasos hacia la descentralización administrativa.

Fuera del ámbito más electoral, el país se encontraba en una crisis evidente. La guerra contra el narcotráfico, representado en Pablo Escobar y el Cartel de Medellín (Aunque con la presencia permanente del Cartel de Cali), estaba en pleno furor. Las guerrillas de izquierda cada vez eran más robustas, en parte por la financiación que recibían del mercado de drogas ilícitas, y se encontraban en un proceso de diversificación de sus actividades políticas, al ingresar a las arenas electorales con sus propias listas y sus propios partidos. Las autodefensas campesinas eran una fuerza establecida, con alianzas con el Estado, el narcotráfico, y las grandes economías locales, que pretendía igualar las fuerzas con las guerrillas en los escenarios municipales y regionales más periféricos (administrativa y territorialmente hablando), las cuales tenían como una de sus columnas de financiación la extorsión y el secuestro de élites económicas en lo rural (Gutiérrez, 2014).

Las localidades se encontraban asediadas, recibiendo ataques desde todos los frentes, al mismo tiempo que sufrían todas las consecuencias de las políticas del gobierno nacional. Las élites locales tanto económicas como políticas emprendieron la labor de mantener el *statu quo*. La primera elección popular de alcaldes dentro de este escenario tuvo lugar en marzo de 1988, mismo año de la

masacre en Turbo, Antioquia, el 4 de marzo; la masacre en Buenavista, Córdoba, el 3 de abril; la masacre en el corregimiento de Nueva Colonia, nuevamente en Turbo, el 10 de abril; y los asesinatos de Elkin de Jesús Martínez Álvarez, alcalde electo de Remedios, Antioquia, militante de la Unión Patriótica, y de Julio Cañón López, alcalde de Vista Hermosa, Meta, también de la UP. La lista continúa, sumando más de 200 personas asesinadas y masacradas luego de la implementación de la elección de alcaldes. La mayoría de las víctimas eran militantes de la UP, o vivían en municipios donde fuerzas alternativas estaban logrando asumir el poder. Los perpetradores en la mayoría de los casos eran los recién nacidos grupos paramilitares (El Tiempo, 2018). Las dinámicas represivas no sólo bloquearon los procesos de apertura democrática, también colaboraron al establecimiento de las estructuras tradicionales de poder y al fortalecimiento de las estructuras criminales en las municipalidades más vulnerables.

3.2. Los partidos políticos de lo micro a lo macro:

Los partidos políticos colombianos se manejan de manera distinta dependiendo del nivel en el que trabajen. La competencia electoral por la Presidencia de Colombia tiene unas dinámicas de alianzas, financiación, estrategias políticas, lobby, incentivos, discursos y hasta de temas de campaña irremediabilmente diferentes a las que puede haber en Teorama, Norte de Santander, por el Concejo Municipal (Arenas y Bedoya, 2015). Las cúpulas políticas tradicionales se encontraban concentradas en el centro del país, geográfica y políticamente. En la primera porque sus grandes núcleos históricos de votación se encontraban en Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, todos hogares de la mayoría de las principales ciudades del país (Losada, 2005); y en la segunda, porque, en términos ideológicos, la diferencia entre uno y otro era cada vez más imperceptible, reconociendo en ambos un acomodamiento sobre la sección derecha de la recta (Gutiérrez, 2013, p. 335).

El modelo político que venía desde el Frente Nacional establecía unas dinámicas de interacción, intrapartidistas e interpartidistas, fundadas en las

conversaciones entre caballeros en lo local (Archer, 1995, p. 180), otorgándole un papel preponderante al individuo que fuese la cabeza política del partido político en su territorio. Por lo tanto, las relaciones entre los ciudadanos y el administrador del gobierno eran casi directas; el modelo de *inputs* y *outputs* estaba establecido sobre un sistema de favores en que la población se comunicaba con su gobierno a través de solicitudes, y estas eran resueltas por el político a cargo de la administración local a través de sus relaciones con los políticos del gobierno central (Gutiérrez, 2007, p. 261-266).

La secuencia jerárquica, conforme a niveles administrativos, funcionaba como una correa de transmisión en la que los clientes locales recibían recursos económicos y capacidad de incidencia en sus gobiernos de parte del político en la administración local, quien se comprometía a controlar y mantener estable su territorio en nombre del partido que lo cobijase (*Ibíd*, p. 267). Este era un modelo que lograba mantener al mismo tiempo la incorporación de los fragmentos de los partidos con su cúpula nacional y un sistema político relativamente estable.

Las características de la coyuntura política luego de la Constituyente le dieron más importancia a la competencia política en lo local, y junto con el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y la reducción de las barreras de ingreso establecidas desde la Constituyente permitió que múltiples marbetes partidistas, por fuera del bipartidismo, logran entrar a la pugna electoral, e incluso obtuvieron triunfos significativos en algunos escenarios particulares (Guzmán Pardo, 2005; Oñoro y Godoy, 2010), al mismo tiempo que “los dos partidos tradicionales se vieron obligados —por razones diversas— a plantear sus propias estrategias de adaptación: debido a su dinámica organizativa, tenían la necesidad de coordinar las acciones de un alto número de facciones, que les dieron heterogeneidad” (Arenas y Bedoya, 2015, pg. 83) y simultáneamente, le echaba leña al problema de la fragmentación política en el país.

Las nuevas normas, técnicamente, incentivaron la continuación del modelo que se había autoimpuesto desde el cierre del Frente Nacional; la diferencia estaba en el papel de las etiquetas de los tradicionales sobre las fuerzas políticas en lo local. Desde finales de los setentas hasta los noventas, la fragmentación partidista venía en crecimiento a causa de las estructuras clientelistas que otorgaron fuerza política a caudillos, terratenientes, y todo tipo de élites socioeconómicas que tenían una alta capacidad de influencia sobre su territorio, a cambio de gobernabilidad sobre los municipios a nombre de los azules o los rojos (Gechem , 2009, p. 141), sin recibir ningún tipo de beneficio por este modo de actuar. Muy por el contrario, disminuyendo la cantidad de curules obtenidas a nombre de su partido y al mismo tiempo, no obtener ningún cargo porque a nombre personal, su lista uninominal no logra pasar el umbral impuesto (Gutiérrez, 2007, p. 310-322).

Luego de casi 20 años de maduración, las dinámicas personalistas y clientelares que rigieron la fragmentación política recibieron la Constitución de 1991, en donde fuerzas políticas dispersas desde los independientes, los cuales agrupaban a las minorías étnicas y culturales y las organizaciones políticas de izquierda, hasta las facciones liberales y las fracciones conservadoras, encontraron un marco normativo que sentaba el terreno para que pudieran "resolver sus problemas de acción colectiva" (*Ibíd*, p. 329-330). Las dinámicas de competencia electoral ya no sólo priorizaban lo local, prácticamente incentivaron el uso de las plataformas municipales como uno de los escalones para llegar al escenario político nacional. Los problemas de acción colectiva no se resolvieron, se agravaron al punto en que el sistema de partidos tenía más listas uninominales que escaños que repartir en básicamente todos los cargos abiertos a elección popular.

Los operadores locales, al no ver un incentivo para continuar participando bajo el cobijo de alguno de los grandes partidos tradicionales, empezaron a utilizar la manta de la nueva Ley de leyes. La constitución acordó que: "los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos" (Artículo 108) y las organizaciones locales supieron utilizar eso a su favor. Desde

“etiquetas asociadas con demandas locales que usaron la figura del número significativo de ciudadanos para afrontar los procesos electorales (e.i. Compromiso Ciudadano, Todos con Luis Pérez, entre muchos otros)” (Arenas y Bedoya, 2015, pg. 85) hasta crear listas de nivel nacional e inscribirlas como “*Movimiento Ideología Innovadora*”²⁷ e ir tras los comicios colegiados nacionales, como se concluye fácilmente al observar la Tabla 1.

Tabla 1

| Año | Liberales | Conservadores |
|-------------|---|---|
| 1986 | Partido Liberal Colombiano, Nuevo Liberalismo | Partido Social Conservador |
| 1988 | Partido Liberal Colombiano, Nuevo Liberalismo | Partido Social Conservador |
| 1990 | Partido Liberal Colombiano | Partido Social Conservador, Movimiento de Salvación Nacional, Movimiento Nacional Conservador |
| 1994 | Partido Liberal Colombiano, Liberalismo Independiente de Restauración, Movimiento Nacional Progresista | Partido Conservador Colombiano, Movimiento Fuerza Progresista, Movimiento Fuerza Progresista, Movimiento de Salvación Nacional, Movimiento Conservador Independiente, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Único de Renovación Conservadora |
| 1997 | Partido Liberal Colombiano, Movimiento Nacional Progresista, Movimiento Apertura Liberal, Movimiento Liberalismo Independiente de Restauración, Movimiento Cívico Seriedad por Colombia | Partido Conservador Colombiano, Movimiento Fuerza Progresista, Movimiento de Salvación Nacional, Movimiento Conservatismo Independiente, Movimiento Nueva Fuerza Democrática, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento de Participación Popular |
| 2000 | Movimiento Apertura Liberal, Movimiento Cambio Radical, Movimiento Alternativa Avanzada-ALAS, Movimiento Voluntad Popular, Movimiento Colombia Mi País, Movimiento de Integración Popular-MIPOL, Movimiento Cívico Seriedad por Colombia, Movimiento Nacional Progresista, Movimiento Nuevo Liberalismo, Movimiento Liberalismo Independiente de Restauración-LINDER. | Movimiento Conservador Colombiano, Movimiento Nacional Conservador, Movimiento Fuerza Progresista,, Movimiento Nueva Fuerza Democrática, Movimiento Conservatismo Independiente, Movimiento Progresismo Democrático, Movimiento Renovación Democrática, Movimiento Unionista, Movimiento de Participación Popular, Movimiento Político Ciudadanos por Boyacá. |

²⁷ Es un ejemplo.

El clivaje liberal-conservador se mantenía como el centro del sistema político, una importante cantidad de los nuevos movimientos políticos mantenían algún tipo de filiación con el núcleo liberal o conservador; sin embargo, las ya debilitadas estructuras ideológicas finalmente habían perdido toda capacidad de cohesión sobre sus fracciones, las fronteras entre los partidos cada vez se hicieron más difusas, hasta el punto en que el cambio de camisetas y la doble militancia se convirtieron en estrategias comunes utilizadas por los múltiples candidatos que se encontraban en la carrera política (Gutiérrez, 2007). Con los partidos concentrados en lo local, y lo local concentrado en los líderes clientelistas que controlaban a los territorios desde el cierre del Frente Nacional, un muy marcado personalismo empezó a surgir con organizaciones políticas creadas con el único objetivo de hacer a su único candidato el ganador de la contienda.

Los nacientes movimientos de izquierda que se encontraban fortaleciéndose desde los escenarios locales también encontraron en el establecimiento de la nueva Constitución el escenario propicio para movilizar sus intereses a un marco más nacional. Gran parte del proceso de descentralización nacional es paralelo al nacimiento de las fuerzas políticas que fungían como brazos políticos de una fuerza insurgente armada de mayor envergadura. En el establecimiento de la Asamblea Constituyente, los frentes políticos nacidos de las conclusiones de los procesos de paz llevados a cabo desde el gobierno Barco lograron números históricos, con un 27% de las sillas puestas en la Asamblea (Botero, Losada y Wills, 2011). Sin embargo, luego de la Constituyente, la izquierda no logró progresar. Las perversiones del sistema electoral en lo local bloquearon su crecimiento desde las bases con sus expresiones de mayor afectación y envergadura a finales de los ochentas, pero con algunas evidentes consecuencias en el modelo posconstituyente.

Las alianzas en lo local, por lo tanto, se alejaron de las motivaciones ideológicas (Gutiérrez, 2007). Las fuerzas políticas locales solían ser al mismo tiempo las élites socioeconómicas, y si no lo eran, se aliaban con ellas. Si se observa todo desde la perspectiva de las élites locales, fueron ellos algunos de los principales afectados en la puja por el poder local. Mientras las guerrillas mantenían parte de su financiación con secuestros y extorsiones a los grandes terratenientes en el campo (Archer, 1995, p. 136), los partidos políticos de izquierda sumaban en sus bases a los campesinos explotados y, en algunos territorios, lograban escaños y alcaldías (Gutiérrez, 2014, p. 378). El tradicionalismo hiperfragmentado se encontraba en una carrera que empezaba en lo local y terminaba en lo nacional (Arenas y Bedoya, 2015), y la izquierda incipiente podía ser un obstáculo, sobre todo en los escenarios más rurales.

3.3. Represión política desde lo local:

Con la *localización* de la política y el modelo descentralizado que pretendía el país desde mediados de los ochentas, las dinámicas de competencia política en lo local iniciaron un proceso de transformación, en donde: en un primer instante, se desarticulaban los partidos nacionales de sus bases políticas en las localidades; y en un segundo momento, el poder local empezó a buscar alianzas significativas que le permitiera hacerse con la mayor capacidad de influencia sobre su territorio. Al mismo tiempo, la izquierda colombiana se encontraba luchando por dos frentes: el armado y el electoral. La Unión Patriótica se establece como el partido político de las FARC-EP, y mientras iban a las pujas por los comicios locales, abiertos a la elección popular desde la implementación del Acto Legislativo 01 de 1986, mantenían su lucha armada activa.

La cúpula tradicional de los partidos no se vio exactamente afectada por la llegada de este nuevo actor. Aunque la Unión Patriótica participó en las elecciones nacionales de ejecutivo y legislativo, en el primero sólo obtuvo una votación del

4,5%²⁸ para su candidato Jaime Pardo Leal en los comicios de 1986. En los cuerpos colegiados logró elegir a 5 senadores y 3 representantes a la cámara²⁹. Mientras que, por el contrario, se hizo con más de 350 concejales municipales en las elecciones locales³⁰, amenazando principalmente a los políticos de los tradicionales en los municipios. Con la entrada en norma de la elección popular de alcaldes en 1988 pusieron 16 alcaldes municipales³¹, y parecían establecerse como una alternativa relativamente fuerte.

Durante los ochentas y los noventas, las fuerzas políticas locales se vieron en la obligación de recurrir a organizaciones privadas para asegurar su patrimonio y sus propias vidas, pues las guerrillas tenían azotados los territorios con las *pescas milagrosas*, extorsiones e intimidaciones en general (Gutiérrez, 2007, pg. 345). Uno de los primeros pasos de las organizaciones paramilitares es el grupo MAS (Muerte A Secuestradores), a finales de 1981, el cual nació como respuesta al secuestro de la hija de uno de los grandes ganaderos de Envigado, Fabio Ochoa. La organización recién creada, en su comunicado inaugural afirmó que contaba con la participación de 230 jefes mafiosos, quienes aportaron 2 millones de pesos y 10 de sus mejores hombres cada uno, otorgándole una base de 2230 miembros y 660 millones de pesos (Neira, 2004). La organización mostró su efectividad, en semanas había identificado al perpetrador (Luis Gabriel Bernal, miembro del M-19), y ellos mismos secuestraron a 25 personas cercanas a él, logrando la finalización del secuestro sin el pago del rescate solicitado por la guerrilla inicialmente, el cual había sido estipulado en 12 millones de dólares.

²⁸ Menos de 350.000 votos. Lo cual no es nada despreciable, pues representa una base social relativamente amplia de apoyo al partido, sin embargo, no los establece como una competencia para los tradicionales. El presidente electo en 1986, Virgilio Barco, fue el más votado en la historia del país hasta el 2000.

²⁹ Datos extraídos de El Tiempo, 1985

³⁰ Datos obtenidos de Cepeda, I. (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. *Revista Cetil*, 1(2), 101-112.

³¹ Datos obtenidos de El Tiempo, 1999.

Sin embargo, sus acciones no se detuvieron en la mera defensa de sus organizadores. Poco tiempo después, al igual que los grupos paramilitares del Cono Sur, se encargaron de la exterminación de los miembros de grupos de izquierda, sus simpatizantes, y de cualquiera que tuviera la osadía de acusarlos públicamente. William de Jesús Parra Castillo, de la organización izquierdista Autodefensa Obrera (ADO), fue asesinado por el MAS; el penalista Enrique Cipagauta Galvis también, por su lucha en defensa de los presos políticos, “amenazaron de muerte al ex ministro y defensor de derechos humanos Alfredo Vázquez Carrizosa y al escritor Gabriel García Márquez. A los [dos], por denunciar a los escuadrones de la muerte” (*Ibídem*).

Los grupos paramilitares, aunque fueron creados en un principio como una alternativa de seguridad privada en el campo, se convirtieron rápidamente en el brazo armado de las fuerzas locales. Aunque con el MAS la financiación venía principalmente del narcotráfico (y también en una importante medida de los ganaderos de Antioquia), grupos como las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), se apoyaban en un triángulo conformado por: “ricos rurales (casi siempre ganaderos o agro-industriales), militares activos y exponentes de la criminalidad organizada” (Gutiérrez, 2015, pg. 184).

Uno de los compromisos centrales de la nueva Constitución era la “municipalización de la vida política colombiana” (Gutiérrez, 2007, pg. 259), en donde se esperaba que el Estado se legitimara, la eficiencia de las administraciones aumentara y las estructuras clientelistas se quebraran al darle nuevamente el poder a la ciudadanía. El compromiso se logró en parte, pero sucedió en paralelo con dos fenómenos: “i) la desagregación paulatina de los grandes baronatos liberales a manos de operadores más pequeños; y ii) los actores armados estaban descubriendo el discreto encanto de la vida política local” (*Ibídem*).

Mientras la izquierda buscaba lograr control político y territorial dentro del marco de su lucha anti-establecimiento, las organizaciones privadas de seguridad

lograron articularse con las élites de los territorios, y encontraron que estas alianzas políticas les permitirían integrarse con los intereses de ciertos sectores estatales en lo local y regional (Gutiérrez, 2015, pg. 156). Gutiérrez afirma que:

"Los paramilitares produjeron bruscos cierres del sistema al nivel municipal y regional (lo que López y Valencia han llamado autoritarismos subnacionales (López, 2010)), pero no convirtieron esa práctica en doctrina. En las regiones, los paramilitares se arroparon con la bandera de la libertad de escoger, oponiéndola a la disciplina social impuesta por guerrillas y milicias" (Ibíd, pg. 338).

Los grupos paramilitares se convirtieron, en un primer momento, entre su nacimiento a principios de los ochentas hasta los noventas, en una herramienta de seguridad para los terratenientes locales, los grandes hacendados, los narcotraficantes, o cualquiera que tuviera la tierra como su medio de producción. Sin embargo, al estar las élites económicas locales tan profundamente interconectadas con las élites políticas locales, y además, éstas últimas estar en riesgo también, a causa de la entrada de fuerzas de izquierda que aparentan despegar dentro del campesinado, el concepto de amenaza terminó drásticamente estirado. Las élites eran vulnerables económica y políticamente en sus territorios, y aunque los políticos nacionales generalmente tenían más restricciones para utilizar de manera abierta y masiva la violencia contra la población civil, las élites regionales y locales no (Ibíd, pg. 339).

En un segundo momento, luego de la nueva norma, los grupos paramilitares ya tenían alianzas establecidas con múltiples actores del escenario político y económico colombiano. Sus primeros pasos como agencia de seguridad privada los acercó al narcotráfico, pero también a la política local y a las economías ganaderas y agroindustriales, y luego de que los operadores locales lograron independizarse de los tradicionales, las alianzas se fortalecieron. "Los políticos que inscribieron la alianza con el paramilitarismo, lo hicieron abandonando el bipartidismo y fundando movimientos de carácter unipersonal o partidos 'independientes' bajo los cuales tuvieron opción de crecer y avanzar con proyección nacional" (Gutiérrez, 2015, 163).

Su estrategia fue simple, asesinar a sus contrincantes, o a cualquiera que fuera un obstáculo en su camino para legitimarse.

Desde los estamentos estatales, sugieren concebirlos como “irregulares” y al mismo tiempo como “una modalidad de dominación regional por medio del gamonalismo armado” (González, Bolívar y Vásquez, 2002, p. 48)³². Desde mediados de los ochentas, fenómenos como la masacre de la Unión Patriótica estuvieron profundamente relacionados con “pequeñas causas locales” (Gutiérrez, 2014, pg. 396), generalmente concentradas en los objetivos que tenían los operadores locales sobre el mantenimiento del control de su territorio. Gran parte de la represión exterminadora ejercida por las alianzas parapolíticas tuvo un “contenido explícitamente eliminacionista, en la medida en que se dirige contra blancos concretos escogidos ya sea a nivel ideológico u operacional para su destrucción y/o expropiación” (*Ibíd*, pg. 18)

Hay documentados 1456 homicidios en 1996 y 808 en 1997 en el Urabá antioqueño. Con el apoyo de las fuerzas paramilitares de la zona, lideradas por Carlos Castaño, se anularon por completo las opciones de izquierda, las cuales habían logrado conquistar ya 10 alcaldías en el área (Valencia, en Velázquez, 2009, pg. 152). Los paramilitares, en general, “asesinaron a adversarios, o simplemente a políticos incómodos para poder legitimarse –por ejemplo en nombre de la lucha contra la corrupción. Compraron a registradores, jueces y funcionarios para afirmar sus mayorías por medio del fraude, ejercieron diversas campañas de intimidación, lanzaron otras simultáneas de servicio social” (Gutiérrez, 2014, pg. 292). Valencia, citado en Gutiérrez (2007) afirma que: “en la zona del Urabá, Carlos Castaño supo establecer las alianzas necesarias para crear un poder envolvente que en poco tiempo eliminó a la Unión Patriótica, doblegó a los sindicatos y a las organizaciones

³² Citados en Sanín, F. G. (2014). *El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)*. IEPRI. Pg. 174

sociales e hizo replegar a las FARC-EP a las zonas periféricas de la región” (pg. 152).

Los militares pronto se dieron cuenta de la eficiencia de los métodos de los paramilitares para replegar a las guerrillas y exterminar a los miembros de la izquierda, junto con sus simpatizantes. Desde mediados de los ochentas, les dieron vía para que se pusieran en la labor, hecho que el país no conoció hasta años después, cuando “el general Rito Alejo Delgado fue vinculado a procesos penales por los hechos de esa época” (Valencia, 2009, 18). Existía un notorio patrón de ceguera sistemática con respecto a las acciones realizadas por los paramilitares, que se ve claramente en los archivos judiciales y de prensa (Gutiérrez, 2014, 179).

Gutiérrez afirma que en muchos territorios, tan pronto concluían su trabajo de “limpieza”, los paramilitares invocaban a los tradicionales para gobernar las administraciones que acaban de dejar vacantes, pues estos no tenían la “mínima capacidad técnica para hacerlo” (2014, pg. 345); sin embargo, a causa de su enfoque local, y las alianzas que lograron con élites agrarias semilegales o ilegales, “los paramilitares tuvieron desde el comienzo reivindicaciones antiestatales y críticas contra el sistema político” (*Ibíd*, pg. 193), así que su base política no se articuló directamente con los partidos tradicionales (las cabezas del sistema político al cual criticaban los paramilitares), sino con los movimientos individuales que estuvieron dispuestos a salirse del bipartidismo, y compartirles a estos directamente. La represión, en importante medida, también estuvo dirigida a los tradicionales (Duncan, 2015), como se puede ver en la tabla 2.

Tabla 2

Asesinatos Políticos 1986 - 2002

| ACTIVIDAD POLÍTICA | Sin Filiación Registrada | Liberal | UP | Conserv. | Sindicato | Org. Popular | Otra Filiación | Esperanza Paz y Libertad | M-19 | Otros |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Alcalde | 100 | 31 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Concejales | 277 | 208 | 50 | 120 | 0 | 2 | 22 | 7 | 5 | 0 |
| Militantes / Activistas | 20 | 6 | 159 | 3 | 31 | 11 | 77 | 114 | 13 | 0 |
| Dirigentes políticos locales | 144 | 87 | 53 | 38 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Inspector de policía | 258 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigentes populares | 58 | 5 | 8 | 2 | 2 | 136 | 11 | 0 | 1 | 3 |
| Otros funcionarios del Estado | 199 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigentes sindicales | 15 | 0 | 7 | 0 | 183 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Candidatos Concejo | 52 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Dirigentes políticos Departamentales | 32 | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Candidatos Alcaldía | 38 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Diputados - Consejeros | 7 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Periodistas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parlamentario | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigente político nacional | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simpatizantes | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Otros | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1235 | 476 | 335 | 242 | 218 | 153 | 150 | 140 | 28 | 4 |
| Porcentajes | 41,4% | 16,0% | 11,2% | 8,1% | 7,3% | 5,1% | 5,0% | 4,7% | 0,9% | 0,1% |

Fuente: DAS, elaboración de Rodolfo Escobedo.

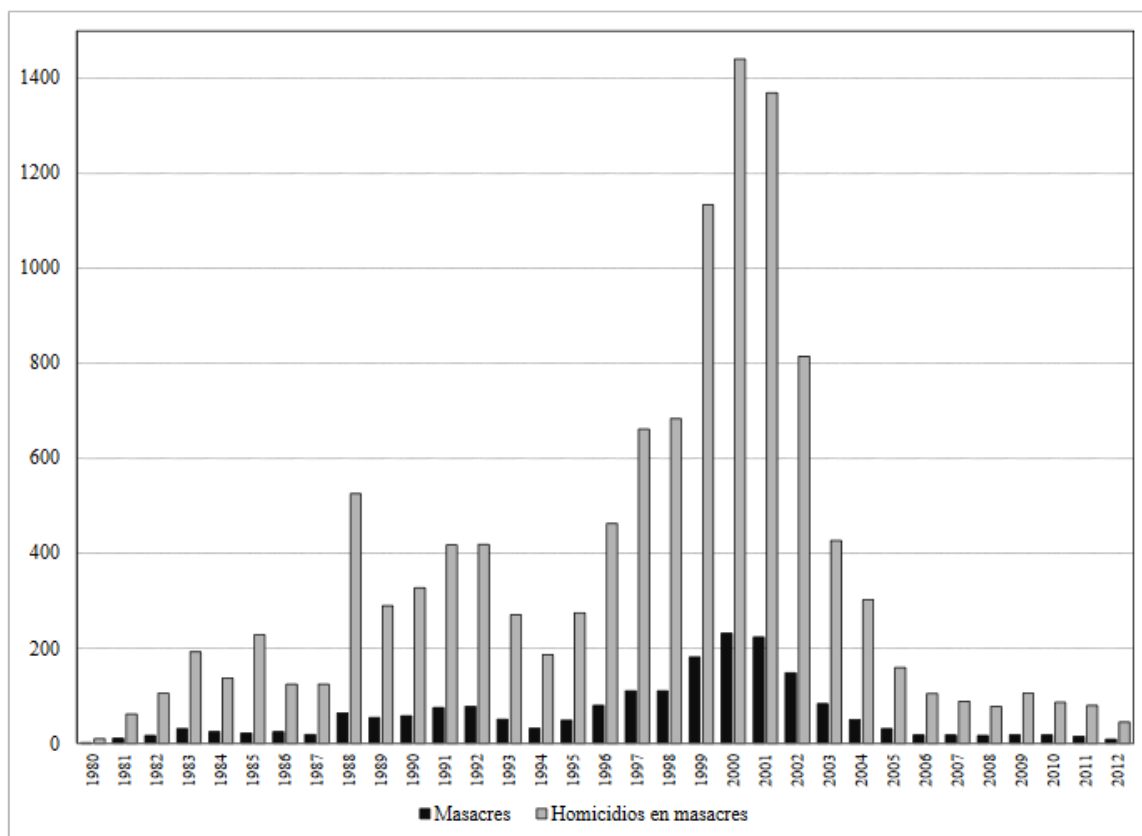
Así que las fuerzas tradicionales políticas no eran las que estaban utilizando prácticas represivas (al menos en esta ocasión), más bien hacían parte del conjunto de las víctimas, sobre todo sus operadores locales. La cúpula tradicional, desde las políticas centralistas del siglo XIX, se encontraba alejada del territorio nacional, por lo que tanto su capacidad de influencia como de reacción ante las dinámicas violentas de las regiones y municipios estaba notablemente disminuida. Los nuevos actores del sistema -que eran los mismos operadores locales de los tradicionales en la preconstituyente, y que se independizaron de estos luego de los incentivos ofrecidos por la nueva norma-, fueron los principales aliados políticos de las organizaciones paramilitares, y por lo tanto su objetivo era eliminar a cualquier contendor, así estos fueran miembros del Partido Liberal o del Partido Conservador.

En comparativa, los números de asesinatos dirigidos a liberales y conservadores es mucho más alto que el de los miembros de la UP en la mayoría de las categorías, sin embargo, la única fuerza política que fue eliminada del

escenario electoral fue la UP. Aunque, proporcionalmente, fueron menos sus víctimas, fueron las suficientes para causar el repliegue casi completo de su capacidad electoral.

Ilustración 3

Masacres y homicidios por masacres 1980



Fuente: GMH.

Los picos de violencia luego de la Constituyente no pueden atribuírsele sólo a las prácticas represivas utilizadas en los escenarios locales, pues múltiples fenómenos estaban teniendo lugar en el país; sin embargo, sí es posible asumir estas estrategias utilizadas por los políticos locales como una de las raíces de estos altísimas tasas de violencia (más de 1400 homicidios en masacres en el año 2000). El brazo electoral de la izquierda, luego de la constituyente, fue totalmente replegado por la violencia sistemática dirigida a sus abanderados, y por ninguna otra razón, electoralmente estaban logrando victorias en ciertos territorios y la

Asamblea Constituyente demostró que tenían cierta fuerza en lo nacional al lograr el 27,1% de los escaños (la AD-M19), muy sobre el 12,8% de los Conservadores. Para las elecciones al Congreso de 1991, luego de que los dos candidatos presidenciales de la izquierda fueran asesinados (Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa) en 1990, lograron poner 9 senadores y 15 representantes a la cámara, mientras que para 1994 no alcanzaron el umbral para poner siquiera un senador, y redujeron los representantes a la cámara a tan sólo 2. Para 1998 ya ni siquiera había fuerzas de izquierda en el tarjetón. La UP sólo pudo presentar candidatos a nivel nacional en las elecciones de 1991, luego de estas la represión logró su cometido.

La represión exterminadora de la que fueron víctimas las fuerzas de izquierda generaron en estas organizaciones dos consecuencias: i) la supresión absoluta de su brazo electoral, y por lo tanto, ii) la concentración de sus esfuerzos en las formas de lucha que les quedaban. Aunque fuerzas guerrilleras como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el M-19 fueron totalmente eliminadas del mapa luego de 1990 -ya fuese el resultado de negociaciones o de la eliminación sistemática de sus abanderados-, las FARC-EP, junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se mantenían en pie de lucha, aún luego del exterminio que sufrió la UP desde mediados de los ochentas. Desde la segunda mitad de los noventas sus acciones violentas también aumentaron, bajo el argumento de que la única forma de luchar contra el Estado eran las armas³³, así que el enfrentamiento entre las fuerzas armadas estatales, apoyadas por los paramilitares en lo local, y la guerrillas izquierdistas explica el altísimo pico de asesinatos, masacres y violencia en general luego de 1998, momento en que estas fuerzas revolucionarias lograron su mayor auge.

Las dinámicas represivas fueron parte fundamental de la construcción del sistema político moderno, y la complejidad de estos fenómenos no puede reducirse

³³ Y el Estado colombiano, técnicamente, comprobó esta premisa al permitir, y hasta auspiciar, la eliminación de su lucha electoral asesinando hasta sus bases de votantes en los territorios.

a una disyuntiva entre derechas e izquierdas. El hecho de que se hayan dirigido esfuerzos a eliminar a políticos tradicionales demuestran que las nuevas fuerzas políticas que se aliaron con estos grupos armados ilegales, que iniciaron como una manera de asegurar y proteger el patrimonio de las élites locales, y terminaron como una herramienta de establecimiento de actores políticos en lo local y regional, lo único que buscaban era instaurarse en las redes de poder, mancomunándose con economías ilegales y fuerzas armadas brutalmente violentas en aras de, en ciertos casos mantener el statu quo, y en otros subir hasta los comicios de nivel nacional.

Conclusiones:

El sistema sí cambió. El bipartidismo en este punto es un tema de estudio, y nada más. Aunque el Partido Liberal y Conservador se mantienen presentes en todos los comicios del país, su papel se ha relegado al de un actor más, a diferencia del rol que ostentaron durante aproximadamente el 95% de la historia republicana, de cabeza política del país. Cuando antes no tenían competencia más que la de ellos mismos, en el escenario político actual es fácil nombrar a tres actores más tan permanentes como los tradicionales, y hasta algunos con muchísimo más protagonismo.

Las tasas de violencia se mantuvieron durante esta etapa, tan altas como lo han estado durante la mayoría de la historia republicana, e incluso con algunos picos bastante destacables. Las prácticas represivas tuvieron un objetivo específico: el oponente, sin importar su bandera. Aunque la izquierda fue, en general, el chivo expiatorio de la historia, y la represión que sufrió implicó su completa eliminación del sistema por más de un lustro, además del aglutinamiento de las fuerzas sobre la derecha ideológica al no haber ninguna otra alternativa; los tradicionales también fueron víctimas de la violencia, sólo por hacerse en el camino de sangre que estaban construyendo los paramilitares junto con las nuevas fuerzas que pretendían subir al poder, y esta información es representativa del nivel de violencia que sufrieron los territorios en el país. Cualquiera que fuera el oponente, era eliminado.

Los niveles administrativos se convirtieron en la escalera que debía subir para crecer políticamente, así que la competencia en los municipios y las regiones se resignificó luego de las políticas de apertura implementadas por el Estado. Los actores compitieron brutalmente en lo local, tanto que durante el cierre del ciclo las tasas de violencia encontraron sus picos más altos desde los ochentas, casi triplicando los momentos más violentos de todo el periodo.

Existen diferencias muy marcadas en las raíces y los desarrollos de los procesos políticos en cada región del país. Desde los mismos fundamentos clientelares, el tradicionalismo logró penetrar los territorios de manera que es posible identificar algunos patrones particulares de comportamiento de escenario a escenario; ésta es una de las interrogantes que deja la investigación, la identificación de estas dinámicas y sus diferencias territoriales.

Los resultados de este trabajo están lejos de ser conclusivos. Hubo una víctima sistemática, sin embargo, esta mantuvo su lucha por el frente armado y logró una finalización negociada del conflicto, que es lo más cerca de ganar que tiene una guerrilla y lo más cerca de perder que puede estar un Estado. En la lucha electoral, sin embargo, fueron derrotados bárbaramente. Los tradicionales perdieron la capacidad de influencia total que tenían sobre el Estado, y son nuevas fuerzas, previamente articuladas con el tradicionalismo pero ahora completamente distanciadas de este, las que lideran al sistema.

La competencia política, que en algunos momentos se tornó drásticamente violenta, tuvo claros ganadores y perdedores. Los perdedores fueron más: la izquierda fue eliminada del sistema, los territorios sufrieron las consecuencias colaterales de la violencia, y el electorado nunca pudo elegir una alternativa sin que esta fuera eliminada, tradicional o de izquierda. Mientras tanto, los ganadores parecen haber sido sólo uno, fragmentado en múltiples facciones: las nuevas fuerzas, independizadas del tradicionalismo, que lograron establecerse como los actores centrales del multipartidismo.

Bibliografía:

- Archer, R. (1995). Party strength and weakness in Colombia's besieged democracy. En Mainwaring, S., & Scully, T. (1995) *Building democratic institutions. Party systems in Latin America*, 164-199.
- Arenas Gómez, J. C., & Bedoya Marulanda, J. F. (2015). Incidencia de los cambios en las reglas de la competencia electoral sobre nacionalización del sistema de partidos: las estrategias de los actores políticos en Antioquia, 1997-2011. *Colombia Internacional*, (85).
- Barrero, F., Liendo, N., Mejía, L., & Orjuela, G. (2013) Abstencionismo electoral en Colombia: una aproximación a sus causas. Registraduría Nacional de Colombia
- Basset, Y. (2018). ¿Cuándo cambia un sistema de partidos? Una perspectiva de análisis electoral desde el caso de Colombia. *América Latina Hoy*, 78, 107-126.
- Battle, M., & Ricardo Puyana V, J. (2011). El nivel de nacionalización del sistema de partidos colombiano: una mirada a partir de las elecciones legislativas de 2010. *Colombia Internacional*, (74), 27-57.
- Battle, M., & Valdivieso, J. R. P. (2013). Reformas políticas y partidos en Colombia: cuando el cambio es la regla. *Politai: Revista de Ciencia Política*, 4(7), 73-88.
- Bonilla, R. L., Losada, R., & Toro, H. U. (1985). Los partidos políticos Colombianos: Presente y futuro (No. 3). Fundación Simón Bolívar, Instituto de Capacitación Guillermo León Valencia.
- Botero, F., Losada, R., & Wills, L. (2011). Sistema de partidos en Colombia 1974-2010: ¿la evolución hacia el multipartidismo? Borrador de capítulo para el libro *Estabilidad y cambio en los sistemas de partidos en América Latina (1978-2010)*, compilado por Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg.
- Campbell, A., Gurin, G., & Miller, W. E. (1954). *The voter decides*.
- Cárdenas, N. G. N. Estudio comparado de la acción política de las organizaciones A Luchar Y Unión Patriótica en Colombia, años 1985-1990.
- Cepeda, I. & Ortiz, C. G. (2005). Capítulo 9: la segregación de las víctimas de la violencia política. Entre el perdón y el paredón, 259-282.
- Cepeda, I. (2006). Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia. *Revista Cetil*, 1(2), 101-112.

- Chasquetti, D. (2001). Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación. Clacso.
- Duncan, G. (2015). Exclusión, insurrección y crimen. *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*.
- Duque Daza, J. (2006). Partidos divididos, dirigencia fragmentada: Los partidos Liberal y Conservador colombianos 1974-2006. *Convergencia*, 13(41), 173-209.
- Duverger, M. (2002). Los partidos políticos. FCE de España.
- Gaitan Pavia, P., & Ospina, C. M. (1992). Poder local: realidad y utopía de la descentralización en Colombia. *Santa Fe de Bogota, Colombia: Tercer Mundo Editores*.
- García Oñoro, J., & Godoy, H. (2010). Partidos, Movimientos y facciones en las elecciones populares de alcaldes en Barranquilla (Colombia), 1988-2007. *Investigación & Desarrollo*, 17(1).
- Gechem, S., & Eduardo, C. (2009). Partidos Politicos en Colombia: entre la Realidad y la Ficción, Los. *Rev. Derecho del Estado*, 23, 131.
- Giraldo, F. (2007). Partidos y sistema de partidos en Colombia. La política por dentro: Cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos, 123-159.
- Gómez Lee, M. I. (2014). El Marco De Las Coaliciones De Causa (Advocacy Coalition Framework).
- González, F. E., Bolívar, I. J., & Vázquez, T. (2003). *Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Centro de Investigación y Educación Popular.
- Gutiérrez Sanín, F. & Cruz Rodríguez, E. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010).
- Gutiérrez Sanín, F. (2002). Fragmentación electoral y política tradicional en Colombia: piezas para un rompecabezas en muchas dimensiones. *Perfiles Latinoamericanos*, junio, 53-77.
- Gutiérrez Sanín, F. (2002). Historias de democratización anómala: el Partido Liberal en el sistema político colombiano desde el frente nacional hasta hoy. Degradación o cambio: evolución del sistema político colombiano, 25-78.

- Gutiérrez Sanín, F. (2012). Una relación especial: Privatización de la seguridad, élites vulnerables y sistema político (1982-2002). *Estudios Socio-Jurídicos*, 14(1), 97-134.
- Guzmán M., C. (2003). Partidos políticos y dimensiones ideológicas en Colombia: esbozo de un análisis espacial. *Estudios Políticos*, 0(23), 103-144.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2003). *Metodología de la investigación* (Vol. 707). México: McGraw-Hill.
- Hoyos G., D. (2005). Evolución del sistema de partidos en Colombia 1972-2000. Una mirada local y regional. *Análisis político*, 18(55), 45-59.
- Kostadinova, T., & Levitt, B. (2014). Toward a theory of personalist parties: Concept formation and theory building. *Politics & Policy*, 42(4), 490-512.
- Leech, Garry (2011). *The FARC the longest insurgency* (en inglés). Halifax, N.S.: Zed books.
- Lopez, G. A., & Stohl, M. (1987). Liberalization and redemocratization in Latin America: the search for models and meanings. *Liberalization and Redemocratization in Latin America*.
- Losada, R. (1984). Clientelismo y elecciones: tres modelos explicativos del comportamiento electoral colombiano. Programa de Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana. Gutiérrez, F. (2007). ¿Lo que el viento se llevó?: los partidos políticos y la democracia en Colombia, 1958-2002. Editorial Norma.
- Losada, R. (2005). Los partidos políticos tradicionales en Colombia: pasado, presente y futuro. Una perspectiva organizacional. *Los retos de la democracia, Foro por Colombia-IEPRI, Bogotá*.
- Losada, R. (2015). Coaliciones que pactan los candidatos a cargos públicos electivos: El caso colombiano.
- Losada, R., & Liendo, N. (2015). El peso de los nuevos partidos en el sistema de partidos colombiano, 1986-2010. *Papel político*, 20(1), cm-dn.
- Matta, L. A. (2002). *Poder capitalista y violencia política en Colombia: Terrorismo de estado y genocidio contra la unión patriótica*. Edición Ideas y Soluciones Gráficas.

- Medina, M. (1979). Terceros partidos políticos en Colombia. *Estudios Marxistas*, (18), 3-31.
- Tirado Mejía, A. (1978). Colombia: siglo y medio de bipartidismo. *Colombia Hoy* (Bogotá: Siglo Veintiuno Editores, 1978), 167.
- Meló, J. O. (1990). Los paramilitares y su impacto sobre la política colombiana. Capítulo publicado en el libro de Francisco Leal y León ed Zamosc., *Al filo del caos: Crisis política en la Colombia de los años 80*.
- Neira, A. (30 de Mayo de 2004). Diciembre 2 de 1981: El comienzo del horror .
Obtenido de Revista Semana:
<https://www.semana.com/especiales/articulo/diciembre-1981-brel-comienzo-del-horror/65872-3>
- Pardo, T. G. (2005). El deterioro de los partidos como vía de transformación del Concejo de Bogotá entre 1970 y 2000. ¿ El proceso de la destrucción creadora?. *Estudios Políticos*, (27), 169-198.
- Pécaut, D. (2003). *Violencia y Política en Colombia: Elementos de reflexión*. Hombre Nuevo Editores.
- Pérez Guevara, N. J. (2009). El sistema de partidos colombianos hoy: la pervivencia y persistencia de la personalización política. *Ciudadanos vs Partidos en América Latina: tensiones, amenazas, dilemas de la democracia representativa*, 1-8.
- Pizarro Leongómez, E. (1997). ¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy. *Análisis político*, 31, 82-104.
- Pizarro Leongómez, E. (2002). Atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las micro-empresas electorales.
- Restrepo, D. I., & Cárdenas, R. E. (2004). Crisis del centralismo y nuevos retos para las entidades territoriales: una mirada desde Colombia. *Cuadernos del CENDES*, 21(57), 23-54.
- Revista Semana. (15 de noviembre de 2014). Por qué las instituciones están en crisis. Revista Semana. Recuperado en: <https://www.semana.com/nacion/articulo/instituciones-en-crisis/409100-3>
- Roll, D. (2002). Rojo difuso y azul pálido: Los partidos tradicionales en Colombia: entre el debilitamiento y la persistencia. Univ. Nacional de Colombia.

- Romario, J., García, A., & Fernández, A. (27 de Abril de 2016). *Multipartidismo*. Obtenido de Diccionario de Ciencia Política y de la Administración: <http://dcpa.wikidot.com/wiki:multipartidismo>
- Salazar, B. P. (2008). *Redes y coaliciones de legales e ilegales en Colombia*.
- Sartori, G. (1999). *Partidos y sistemas de partidos: marco para un análisis* (Vol. 107). St. Martin's Press.
- Valdéz, B. (13 de marzo de 2018). Elección de alcaldes, 30 años de una apertura democrática teñida con muerte. *El Espectador*. Recuperado en: <https://colombia2020.elespectador.com/verdad-y-memoria/eleccion-de-alcaldes-30-anos-de-una-apertura-democratica-tenida-de-muerte>
- Velázquez, F., Restrepo, D., Saldías, C., Herrera, J. and Zapata, L. (2018). *Evento 30 años de elección popular de alcaldes*. Recuperado en: <https://www.youtube.com/watch?v=Kwlpz3sSOg&t>